

RESUMEN PRENSA

Viernes, 22 de noviembre de 2019

RESUMEN DE PRENSA DEL IEF
Viernes, 22 de noviembre de 2019

EMPRESA FAMILIAR

Levante. La promesa fiscal de Puig a las empresas se aplica ya en seis comunidades.
Diario de Noticias. Saiz descarta una “bajada de impuestos a lo grande” y apuesta por medidas fiscales progresivas.

INFORMACIÓN ECONÓMICA

Expansión. OCDE: La incertidumbre política frena los ajustes que necesita España.
El Mundo. La OCDE alerta de un frenazo en seco del empleo.
El Economista. Calvo y Calviño pugnan por dominar la Comisión de Asuntos Económicos.
El Mundo. Blindaje a la Seguridad Social.
El Economista. Las empresas sopesan pagar ya los dividendos para evitar más impuestos.
Cinco Días. BBVA Research anticipa una subida de la tasa de desempleo.
El Economista. La fatiga económica estanca el avance de las exportaciones.
La Razón. La automoción pierde 825 millones en exportaciones.
Abc. España dejará de exportar 150.000 toneladas de aceite de oliva cada año.
El País. Los robots también suplantarán a los ingenieros.
La Vanguardia. Barcelona, la tercera ciudad europea preferida para crear una ‘start-up’.
El Periódico. El Gobierno mantiene su plan en Bankia pese a Podemos.
Expansión. El BCE estudia rebajar el capital exigido a los bancos que se fusionen.
Abc. Moody’s rebaja a “negativa” la calificación de los bancos alemanes.
El País. La OCDE apunta al cambio climático como riesgo económico “estructural”.



EMPRESA FAMILIAR



JULIA RUIZ VALÈNCIA

■ Prácticamente la mitad de las comunidades autónomas de España aplican en la actualidad la bonificación del 99 % al valor de la empresa cuando el negocio se transmite de padres a descendientes en los casos de fallecimiento.

La mejora en el impuesto de sucesiones y donaciones constituyó uno de los platos fuertes del programa electoral de Ximo Puig cuyo objetivo era «garantizar» la continuidad de la empresa familiar y de los empleos que genera. La medida, sin embargo, ha encajado en las Corts por las diferencias entre los socios del Botànic sobre el alcance de esta reducción. El PSPV, atendiendo a la demanda del empresariado, quiere que se aplique a cualquier negocio, sea cual sea su facturación, mientras que Compromís y Unides Podem se sienten más cómodos con una mejora que solamente afecte a aquellas empresas cuya facturación no supere los diez millones al año.

El rifirrafe político, junto con una concatenación de errores y malentendidos, ha situado esta medida en dique seco y a los socialistas valencianos solo les queda ahora recurrir a los partidos de la oposición para salvarla.

Los socialistas sostienen que esta propuesta busca luchar de alguna manera con el *dumping* fiscal que, según denuncia el Consell, prácticas comunidades como Madrid, que al no arrastrar los problemas de financiación de la Comunitat Valenciana, pueden atraer empresas gracias a importantes rebajas fiscales. Sin embargo, en el caso concreto de la transmisión de una empresa familiar, son una decena las comunidades que han

La promesa fiscal de Puig a las empresas se aplica ya en seis comunidades

► Galicia, Asturias, Cantabria, Aragón, Castilla y León y Canarias han ampliado hasta el 99 % la bonificación del impuesto de sucesiones como reclama el PSPV

Aplicación del impuesto de sucesiones en empresas familiares

POR PORCENTAJE Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS



Fuente: Ministerio de Hacienda.

INFOGRAFÍA | LEVANTE-EMV

echado mano de su capacidad normativa para mejorar la legislación estatal, que establece una bonificación general del 95 %.

Así, según los datos del Ministerio de Hacienda, Galicia, Asturias, Cantabria, Aragón, Canarias y Castilla y León son las seis comunida-

des que han mejorado la reducción estatal al subirla al 99 %. Ninguna de ellas hace distinciones por la dimensión de la empresa.

Madrid mantiene la reducción al 95 % en la base, pero dado que en la cuota el impuesto de sucesiones está bonificado al 99 %, la tributación prácticamente desaparece. Cataluña, por su parte, amplió la bonificación al 97 %.

Cabe apuntar que cada gobierno autónomo ha regulado estos supuestos de adquisiciones *mortis causa* en la empresa familiar de forma diferente. La causalística es amplia y, por ejemplo, la valenciana -a diferencia de otras- no establece como obligación que la empresa que se transmite esté domiciliada en la Comunitat Valenciana. Además, la normativa autonómica es la única de las citadas que hace distinciones entre empresas por volumen de negocio.

De hecho, fue el Consell del Botànic, en 2016, el gobierno que a petición de los expertos excluyeron a las grandes empresas de las ventajas reguladas para las pymes. A partir de 2017, fueron excluidas de las mejoras previstas en la norma valenciana, aunque a efectos de bonificación continuaron beneficiándose de la reducción del 95 % ya que regían por la normativa estatal.

Madrid mantiene el porcentaje estatal del 95 %, pero en la práctica el gravamen está casi eliminado

Bonig detalla a la jueza el trámite para saldar la deuda de la visita del papa

Un documento interno de Vaersa cuestiona la versión que la presidenta del PPCV dio a los medios tras declarar

J. N. I. / L. B. VALÈNCIA

■ La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, afirmó ayer a los medios tras declarar ante la jueza que investiga irregularidades en la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, el ente que organizó la visita del papa a València, que ha quedado «absolutamente acreditado que no hubo condonación de deuda» a la fundación que organizó el evento religioso. Además, insistió en que existen documentos

que lo demuestran y marcó distancia con el resto de indicios de delito que se investigan.

Así lo aseguró a su salida de la Ciudad de la Justicia, donde había sido citada en calidad de testigo para esclarecer si hubo condonación de una deuda de más de 500.000 euros a esta fundación cuando era consejera delegada de Vaersa en calidad de consellera de Infraestructuras.

La deuda no se pudo saldar hasta marzo de 2014, cuando se pudo liquidar la entidad durante la presidencia de Alberto Fabra. Tal como publicó Levante-EMV en 2018, es Bonig quien suscribe el escrito que libera a la fundación de pagar la deuda.

«El pasado 5 de marzo de 2014 se adoptó el acuerdo por el



Isabel Bonig, presidenta del PPCV, ayer en la Ciudad de la Justicia. GERMÁN CABALLERO

que la Generalitat se subrogaba en la deuda que la Fundación V Encuentro mundial de las familias, como deudora, mantiene con Vaersa», introducía la excosellera. Y continuaba el texto: «Vaersa acepta la subroga-

ción, libera de la obligación de pago a la Fundación y consiente su liquidación».

En cambio, desde el entorno de Bonig ya explicaron a este periódico que la deuda la pagó la Generalitat a Vaersa «gracias a

una modificación de crédito, en cumplimiento de un acuerdo del Consell». La intervención no puso reparos a este documento y fue aprobado por el protectorado de fundaciones, según consta en la causa.



SAIZ DESCARTA UNA "BAJADA DE IMPUESTOS A LO GRANDE" Y APUESTA POR MEDIDAS FISCALES PROGRESIVAS

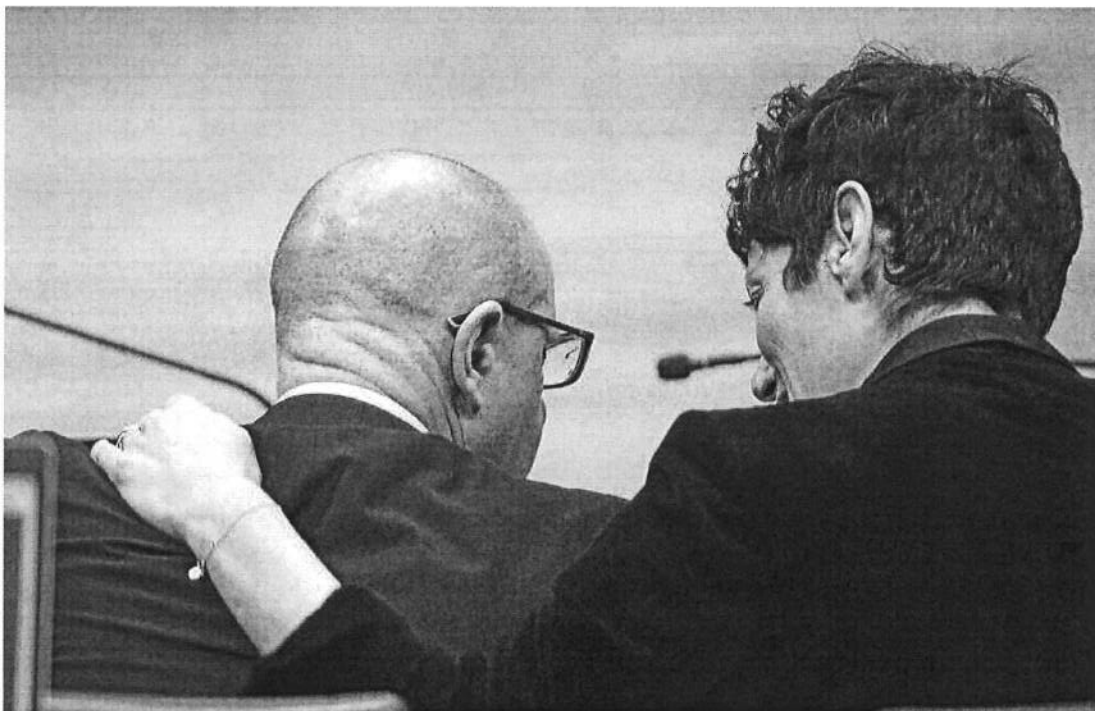
● Araiz (EH Bildu) agradece que el Gobierno no haya hecho "tabla rasa" en fiscalidad, pero anuncia que enmendará la exención al patrimonio empresarial ● Navarra Suma no aclara qué hará con esa medida y ofrece negociar una reforma fiscal "amplia", algo que está muy lejos de la idea del Ejecutivo

✎ A. Irisarri
📷 Patxi Cascante

PAMPLONA – El Gobierno foral va dejando entrever cuál va a ser su *espíritu tributario* para confeccionar los Presupuestos Generales de Navarra para 2020. Y entre la "política de exenciones" y las "bajadas de impuestos a lo grande" de Navarra Suma y la "progresividad, redistribución y la lucha contra el fraude" del bloque que componen PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, la presidenta María Chivite y la consejera Elma Saiz –titular de Hacienda– optaron ayer por la segunda opción.

El Parlamento de Navarra acogió ayer una sesión en la que el paquete de medidas fiscales aprobado por el Ejecutivo el viernes pasado tuvo una especial importancia, también por el mero hecho de que quienes formularon las preguntas fueron los grupos de los que dependerá, en última instancia, la aprobación o no de las Cuentas Generales. Tanto Navarra Suma (que registró una interpelación y una pregunta) como EH Bildu (con otra pregunta) se preocuparon por cómo será el desarrollo de la fiscalidad en los próximos meses, y tendieron su mano al Gobierno para negociar. La parlamentaria María Jesús Valdemosor, de la coalición de derechas, mantuvo una calculada posición ambigua en iniciativas que a priori entran en los esquemas de la derecha –como la exención de los bienes afectos a la actividad empresarial–, avisó de que no aprobarán "retales" y se ofreció para negociar una reforma fiscal "amplia" y "sosegada". Y Adolfo Araiz, coportavoz de EH Bildu, aunque anunció la oposición rotunda de su grupo a la exención del patrimonio empresarial, se alegró porque el Gobierno no haya hecho "tabla rasa" con toda la fiscalidad anterior e incluso dejó entrever que negociará enmiendas, especialmente para retener la sangría de un impuesto, el de Sociedades, que pierda capacidad recaudadora a medida en la que aumentan los beneficios empresariales.

Ahora queda por ver qué mano terminará estrechando el Ejecutivo. O sí, como parece, podrá incluso agarrar las dos –la de la derecha para la



La consejera de Hacienda, Elma Saiz, pasa la mano por el hombro al consejero de Educación, Carlos Gimeno, ayer en el pleno del Parlamento.

reforma del patrimonio empresarial; la de la izquierda para el IRPF de maternidad, la deflactación. Pero en cualquier caso todo apunta a que el espíritu no es el de acabar con el trabajo en materia fiscal y tributaria iniciado en la legislatura pasada.

PROGRESIVIDAD De hecho, este punto centró buena parte de la interpelación solicitada por Valdemosor a la consejera Saiz. Navarra Suma, que todavía no ha digerido que el PSN haya elegido otros socios de gobierno, se dedicó a reprochar las contradicciones entre el PSN que la legislatura pasada se opuso a la política fiscal del cuatripartito y el PSN de hoy, que "ha heredado el marco fiscal anterior", dicho como un reproche por parte de Valdemosor. A estas alturas, es un esfuerzo inútil. Saiz defendió las tres

medidas más comentadas del paquete fiscal –la deflactación de la tarifa del IRPF, las deducciones por maternidad y la exención del patrimonio empresarial– como justas y necesarias en un escenario de "progresividad". La deflactación, dijo, beneficiará a todos los contribuyentes del IRPF; la exención de patrimonio era necesaria para "cuidar a la empresa familiar"; y las deducciones de maternidad son "la única solución posible con seguridad jurídica". Tema en el que, por cierto, Saiz pidió a Navarra Suma que deje ya de defender una exención que han rechazado los tribunales, porque "solo crea inseguridad en un colectivo tan importante". Por todo ello, animó a Navarra Suma a dejar "el recetario clásico de la ideología conservadora" que les lleva a exigir siempre "bajadas a la grande", y cues-

tionó si esas críticas vertidas en pleno anticipan el rechazo a medidas que encajan con la coalición de derechas. "Me extrañaría que se quedaran fuera de la reforma del patrimonio empresarial", reflexionó Saiz.

Es, en esencia, la línea que marcó un poco antes la propia presidenta del Gobierno, María Chivite, encargada de dirimir las preguntas formuladas tanto por Valdemosor como Araiz. La presidenta, al margen de defender el paquete de medidas, también se ocupó de explicar cómo se mejorará la recaudación, interrogante en el que no se detuvo Saiz. Existe, entre algunos socios del Gobierno, la inquietud de dónde va a obtener ingresos el Ejecutivo si en cierto modo las tres medidas fiscales anunciadas son recortes en la recaudación. Básicamente, explicó Chivite, de la lucha contra el frau-

de –con la futura oposición de 25 técnicos de Hacienda de diferentes niveles– y del "análisis en detalle de en qué se gasta". En esta línea podría ir lo que ya anunció la consejera Saiz hace un par de semanas: que se evaluarán sí, de verdad, muchas de las ayudas empresariales tienen un retorno efectivo en forma de empleo, por ejemplo.

No será en lo único en lo que tendrá que trabajar el Gobierno, a juicio de Araiz. Al margen de lo ya dicho, el coportavoz del partido soberanista animó a revisar en profundidad la efectividad del Impuesto de Sociedades, que en 2017 recaudó 303 millones y, al año siguiente, 232. "Sociedades va bajando al ritmo que aumentan los beneficios empresariales", se quejó Araiz, que por lo menos se congratuló de que no se haya hecho "tabla rasa" con la fiscalidad de 2015. ●

INFORMACIÓN ECONÓMICA



OCDE: La incertidumbre política frena los ajustes que necesita España

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS/ El club de los países desarrollados empeora todos sus pronósticos para España: PIB, paro, deuda, déficit... En el caso del desempleo, estima que apenas se reducirá en 2020.

J. Díaz, Madrid

La economía española carga sobre sus espaldas la pesada losa de la incertidumbre política, que no solo está lastrando su crecimiento sino que además nubla sus perspectivas de futuro. La OCDE empeoró ayer todas sus proyecciones para España: PIB, paro, déficit, deuda... Y culpó a la incertidumbre política de generar "ambigüedad" sobre la posición fiscal del país; es decir, de dilatar los ajustes presupuestarios que precisa España para apuntalar el crecimiento, seguir atrayendo a la inversión e impulsar la confianza empresarial. En su último informe semestral, publicado ayer, el club de los países desarrollados ha recortado en dos décimas su previsión de PIB para este año, hasta el 2%, y en otras tres la de 2020, que cae al 1,6%, en ambos casos por debajo de las estimaciones del Gobierno en funciones de Sánchez, que vaticina un alza del 2,1% en 2019 y del 1,8% el año que viene.

Exigua reducción del paro

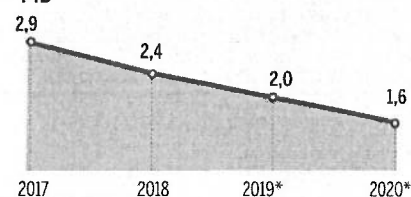
Ante el frenazo que ya se registra en la creación de empleo, la OCDE ha empeorado también sus pronósticos para el mercado laboral. Ahora contempla que la tasa de paro cierre este año en el 14,2%, frente al 13,8% que estimaba en su informe de mayo, y cree que apenas se re-

LAS PREVISIONES DE LA OCDE PARA ESPAÑA

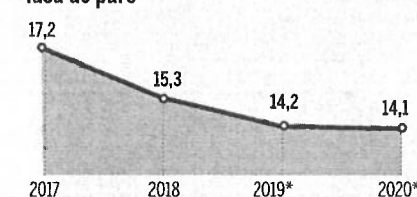
Datos, en %.

*Estimaciones.

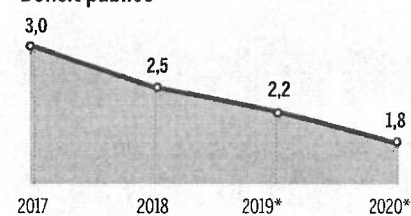
> PIB



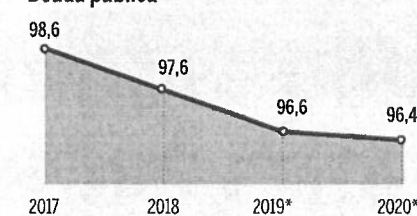
> Tasa de paro



> Déficit público



> Deuda pública



Fuente: OCDE

Expansión

ducirá una raquítica décima en 2020, hasta el 14,1%. Habría que esperar a 2021 para ver bajar el desempleo por debajo de esa cota, al 13,6%.

La Organización resalta que España apenas logrará reducir su abultada deuda pública en el próximo trienio (del 96,6% previsto para este año al 96,2% en 2021) y alerta de una mayor desviación de lo previsto en el déficit, que ha elevado hasta el 2,2% para este año, dos décimas más que en su informe anterior y que lo estimado por el propio Gobierno español. Para 2020, la OCDE vaticina un des-

Pide un Gobierno con "la mayoría más sólida posible" para abordar "reformas profundas"

fase del 1,8%, frente al 1,7% del Ejecutivo. Su toque de atención se produjo apenas un día después de que Bruselas también leyera la cartilla a España por el riesgo de desviación significativa respecto a los objetivos de consolidación fiscal.

La OCDE rehuyó ayer caer en el alarmismo. El club de pa-

íses desarrollados "no está demasiado preocupado en el corto plazo por la influencia de la política en la economía", que de hecho seguirá creciendo por encima de la media europea, aseguró su economista jefe, Laurence Boone, quien, no obstante, alertó de la necesidad de contar con "un Gobierno en marcha con la mayoría más sólida posible" para abordar las "reformas profundas" que necesita la economía española, que además de al enfriamiento y la inestabilidad interiores debe hacer frente a la amenaza exterior.

La OCDE recortó ayer un décimo el crecimiento global en 2020, hasta el 2,9%, el más lento en una década, y dibujó un horizonte de fragilidad económica ante las tensiones comerciales, la cuasi perenne amenaza del Brexit y la pérdida de fuelle de la economía china. Una sirena de alarma que también hizo sonar ayer el FMI, al advertir de que el mundo se enfrenta a una ralentización económica "sincronizada" por esta combinación de factores letales.

Al tjeretazo de la OCDE en sus pronósticos para España se unió ayer una batería de indicadores que refrendan la paulatina pérdida de fuelle de la economía doméstica. Así, la cifra de negocios de la industria cayó un 1,4% en septiembre respecto a agosto una vez eliminados los efectos estacionales y de calendario, y un 1,6% en tasa anual, mientras que la entrada de pedidos se redujo un 1,8% en el mes y un 1,1% en tasa anual, corregidos también los efectos estacionales. Por su parte, el déficit comercial creció un 5,2% hasta septiembre por el frenazo de las exportaciones, que crecieron un 1,6%, su tasa más baja desde 2014, una desaceleración que el Club de Exportadores e Inversores calificó ayer de "preocupante".

La OCDE alerta de un frenazo en seco del empleo

Recorta dos décimas, hasta un 2%, su previsión de crecimiento para España este año

DANIEL VIAÑA MADRID

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) avisa del notable estancamiento que ya sufre la reducción del paro en España. El organismo, en las previsiones económicas publicadas ayer, prevé que la tasa de desempleo se quedé en el 14,2% este año y apenas se reduzca una décima el próximo, hasta el 14,1%. Para 2021, la organización prevé que el paro disminuya algo más, aunque el medio punto que estima sólo servirá para que la tasa caiga hasta el 13,6%.

Este negativo escenario en el ámbito del empleo se extiende, y al mismo tiempo está provocado, por el menor crecimiento. En concreto, la OCDE prevé que el PIB de España avanzará un 2% este año, lo que supone dos décimas menos respecto a la anterior estimación; y un 1,6% en 2020, que representa otras tres décimas de reducción.

Las cifras del organismo que dirige el mexicano Ángel Gurría contrastan con las estimaciones oficiales, que en todos los casos son más optimistas. Mucho más, incluso. Así ocurre con el empleo, aspecto en el que el Gobierno de Pedro Sánchez sigue descartando cualquier tipo de frenazo a pesar de que ya no sólo la OCDE, sino también la Comisión Europea y el Banco de España han avisado de que el ritmo de creación de puestos se está estancando.

Así, el Ejecutivo afirma que la tasa de paro caerá del 15,3% de 2018 al 13,8% este año, y que en 2020 el dato será del 12,3%. La OCDE, como se ha apuntado, cree que ese 12,3% no será posible ni siquiera en 2021. En

lo que al crecimiento respecta, las previsiones oficiales recogen un avance del 2,1% para este año y del 1,8% para el próximo, datos que también en este caso superan a los proyectados por la OCDE, el Banco de España y la Comisión Europea.

El principal aspecto que motiva la moderación del PIB, explica el documento del llamado *club de los países ricos*, es el agotamiento de la demanda interna. Este aspecto ha sido básico durante los años de mayor crecimiento, pero en los últimos meses las señales de alarma se han multiplicado y coinciden en señalar que hay una contracción evidente.

«La demanda interna es menos dinámica que en el pasado», explica la OCDE, que prevé que esta situación se acentúe en los próximos años por dos aspectos clave: reducción de la demanda embalsada e incremento de la tasa de ahorro de las familias.

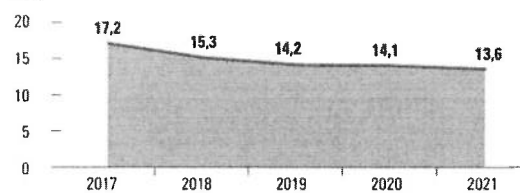
El empleo, por su parte, también «se moderará», y una vez más, en contra de lo que dice el Gobierno no crecerá por encima del PIB. Sin embargo, lo que sugieren las previsiones de la OCDE en cuanto a ritmo de creación de empleo es que, tal y como esgrimió en las últimas semanas el Ejecutivo de Sánchez, no se reduce más la tasa de paro porque hay más ciudadanos buscando trabajo de manera activa. Esto es, que existe una indudable reducción en el ritmo de creación de puestos pero, además, hay más demandantes. Y el resultado final es que la caída de la tasa se frena por partida doble.

El informe también apunta a la «incertidumbre política», aspecto que «genera ambigüedad sobre la fu-

EL FUTURO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

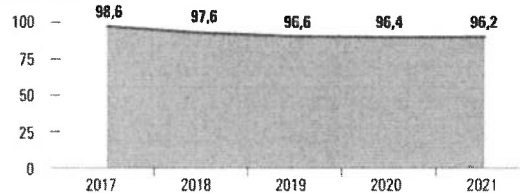
TASA DE PARO

En %



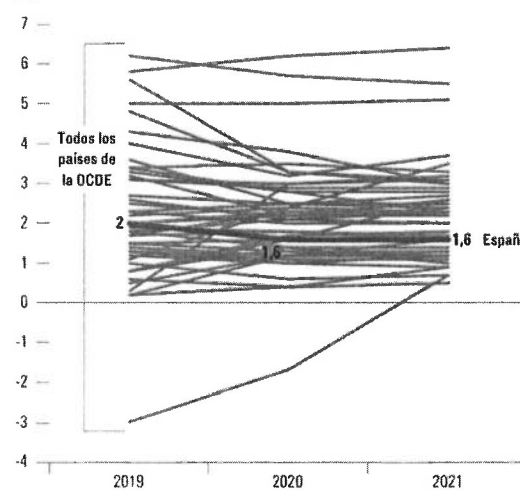
DEUDA PÚBLICA

En % de PIB



CRECIMIENTO DEL PIB

En %



FUENTE: OCDE.

Álvaro Undabarrena / EL MUNDO

tura posición fiscal». Las políticas del PSOE, y más las de Podemos, apuestan por un incremento en el gasto, que se sustenta en unos mayores ingresos tributarios. Y un Gobierno

formado por ambos iría, sin duda, por ese camino y no tanto por la vital reducción de la deuda pública que ayer la OCDE y anteayer la Comisión Europea pidieron a España.

España deja de ser el alumno aventajado en crecimiento

D. VIAÑA MADRID

España fue durante buena parte de la recuperación el país avanzado que más creció, tal y como constató el Fondo Monetario Internacional (FMI); una de las economías de la OCDE con mayor vigor, según constataba la propia organización; y, en definitiva, un alumno aventajado en lo que al repunte del Producto Interior Bruto (PIB) se refiere. Pero eso ya es pasado.

Las previsiones que la Organización publicó ayer constatan que España, con un 2% de crecimiento previsto para este año, se sitúa ya en un nivel medio dentro de la OCDE. Pero para el año que viene, la economía española estará ya en el tercio de países que menos crecen, situación que se agudizará en 2021. En ambos casos, el repunte previsto es del 1,6%, cifra que no sólo está lejos de los fuertes avances de la India, China o Indonesia, sino que también quedan por detrás de países como EEUU, Canadá, Corea o Grecia, a los que hasta hace poco superaba claramente.

Esta circunstancia no hace más que confirmar que España va a entrar en un período de crecimientos moderados, muy inferiores al 3% que llegó a alcanzar e incluso superar en 2015 o 2016, y lejos también del 2%. Las consecuencias de esta atonía no se limitan a que el PIB crezca más o menos. La economía española, por sus características, necesita repuntes vigorosos para crear empleo. Hasta el inicio de la crisis se estimaba que la cifra mínima era un 2%. Tras la recesión, existe un amplio consenso al afirmar que el nivel se ha moderado pero que, en todo caso, esa cifra está todavía cercana al 1,5% y que por debajo de la misma se comienza a destruir empleo.



LA TIERRA MEDIA

VICENTE LOZANO

El Gobierno imposible

O aquí todo el mundo miente más que habla o Pedro Sánchez no va a tener nada fácil formar un Gobierno que le permita llegar a la cama cada día con una cierta tranquilidad. A tenor de las declaraciones posteriores al preacuerdo, sólo en el caso de que tanto el PSOE como Podemos claudiquen de sus postulados previos sobre la economía del país, se podrá formar un Ejecutivo en el que los Consejos de Minis-

tros sean algo más que un guirigay de reproches o de tira y afloja entre los ministros socialistas y los que acompañen a Iglesias a La Moncloa.

Uno de los puntos de fricción será la reforma laboral. El preacuerdo firmado por Sánchez y Pablo Iglesias el martes 12 de noviembre no se refiere a ella. La única alusión al tema es esa difusa declaración de intenciones de «consolidar el crecimiento y la creación de empleo [...]». Combatir la precariedad del mercado laboral y garantizar trabajo digno, estable y de calidad». Una aserción que firmaría cualquier español de bien. Pero a esa buena intención hay que ponerle patas y en el asunto del empleo solo hay una: derogar la reforma laboral del PP como dice Podemos, o eliminar los «aspectos más lesivos» de la misma, como afirma el PSOE.

Con este planteamiento, la ministra Nadia Calviño -mujer fuerte del nuevo

Gobierno si Sánchez no cambia de opinión, je- acaba de afirmar que el despido no se va a encarecer y se mantendrá en los 20 días. «Que se considere que esto es muy barato es relativo. Cuando hacemos una comparación internacional, nuestro país no sale particularmente bajo», recoge *Expansión* de una entrevista de la ministra en Ràdio 4. También dijo que el PSOE tampoco tiene en mente tocar la prevalencia de los convenios de empresa, algo que quieren eliminar Podemos y, sobre todo, los sindicatos. De esta forma, para Calviño, eliminar los «aspectos más lesivos» de la reforma laboral de Fátima Báñez se circunscribiría a luchar contra el abuso de las subcontratas y a mejorar la situación de los *riders*, los repartidores de las plataformas.

En materia económica, el nuevo Ejecutivo va a tener que hacer frente a una triple fuerza. Por un lado, el compromiso de ese

susuesto progresismo tan comentado por Sánchez e Iglesias cuando presentaron el preacuerdo. Por otro, el presidente y la futura vicepresidenta -si Sánchez no se echa atrás, je- ya viven la presión de los empresarios, algunos de los cuales han avisado de que pueden adelantar planes de regulación de empleo ante los posibles cambios legales. Y, por último, está la Comisión Europea, que aunque no comenta sobre el posible Gobierno PSOE-Podemos, insiste en que nada de veleidades fiscales en la política económica, porque España todavía tiene desafíos por delante en forma de reducción del déficit, de la deuda y la fragilidad del sistema de pensiones.

Vuelvo al principio. O todo el mundo miente y está dispuesto a renegar de sus principios con tal de pisar las alfombras del poder o lo que se está pergeñando es un Gobierno imposible. Aunque Sánchez consiga ser investido. @vicentelozano



Calvo y Calviño pugnan por dominar la Comisión de Asuntos Económicos

La vicepresidencia primera será para Carmen Calvo y la segunda para la ministra Nadia Calviño

Iglesias será el vicepresidente tercero y manejará todo lo relacionado con las políticas sociales

E. Ortega / C. Obregón MADRID.

La formación del futuro Gobierno de coalición progresista no solo está requiriendo negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos, sino también dentro del propio Gabinete. Según ha podido saber *elEconomista*, Carmen Calvo, a día de hoy vicepresidenta única del Gobierno, quiere en el próximo curso tener el control sobre la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. El órgano a día de hoy está presidido por Nadia Calviño, posición que la ministra de Economía en funciones quiere mantener, si finalmente es designada vicepresidenta responsable de las áreas económicas.

Y es que a pesar de que Calvo ya preside la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que es el órgano que prepara y decide los asuntos que se van a tratar en el Consejo de Ministros, gran parte del poder real reside en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. En ella se decide qué políticas se aplican o no desde el punto de vista financiero, y la presidenta, a día de hoy Calviño, es la que decide qué temas entran en el orden del día.

Es decir, que esta figura tiene una capacidad de veto extraordinaria y la capacidad de parar los asuntos *sine die*. Con una excepción: el propio jefe del Ejecutivo y presidente del Gobierno, que puede empujar las políticas en la dirección que crea preciso. De hecho, dada su importancia, Mariano Rajoy decidió presidirla durante sus mandatos.

En el pasado, este órgano ha sido fruto de numerosos roces entre los miembros del Ejecutivo que todo indica que en un futuro Gobierno de coalición se multiplicarán. La idea que hasta ahora se había trasladado desde La Moncloa es que la posición de Nadia Calviño como presidenta de la Comisión Delegada iba a servir para frenar determinadas reclamaciones que las futuras carteras de Unidas Podemos pudieran hacer. Es más: ya en el pasado la ministra de Economía hoy en funciones frenó legislaciones y políticas relacionadas con Vivienda, por considerar que podían dañar de alguna manera el tejido económico y productivo.

Las pretensiones de Calvo deja en una situación especialmente delicada a Calviño, puesto que supone una contradicción con el compromiso que anunciara Pedro Sánchez



Carmen Calvo. EUROPA PRESS



Nadia Calviño. EUROPA PRESS



Pablo Iglesias. EFE

de que sería la futura vicepresidenta económica. Sin la presidencia del principal órgano de control económico del Gobierno, su cargo acabaría en el futuro totalmente vacío de contenido.

Todo lo contrario de lo que había prometido el candidato socialista, quien la ha venido exponiendo como una muestra del compromiso de España con la disciplina fiscal y pre-

supuestaria y con los objetivos de estabilidad económica de cara a la Unión Europea.

Vicepresidencias

Más allá de estos interrogantes, lo que parece ya decidido es el reparto de vicepresidencias del futuro Gobierno de coalición. La citada Carmen Calvo mantendría su puesto como vicepresidenta primera

responsable del área política. La política cordobesa se mantendría como *número dos* del Ejecutivo, con unas atribuciones similares a las actuales, aunque perdería el dominio de igualdad que pasaría a manos de Unidas Podemos, como adelantó este jueves *elEconomista*.

Calviño se quedará con una vicepresidencia segunda, que concentraría los poderes económicos del

Ejecutivo. Todavía queda la duda de si bajo su mando estará la Comisión Delegada.

Mientras, Pablo Iglesias, ya sin el veto de Sánchez para entrar en el Gobierno, sería vicepresidente tercero y quedaría al cargo de las políticas sociales.

Sin embargo, todavía queda por delimitar cuáles van a ser las políticas sobre las que tendrán dominio el PSOE y Unidas Podemos. Está claro que bajo el control de los socialistas quedarán todos los Ministerios de Estado y los económicos, tales como Exteriores, Defensa o Economía. Sin embargo, en el resto de Departamentos las quinielas están abiertas.

Como contó ya este medio, todo apunta a que Unidas Podemos se quedará con tres, que tendrán que ver con las competencias de Igualdad, Vivienda y Sanidad y Servicios Sociales, aunque entre los morados no apasiona el ponerse al frente de las atribuciones sanitarias que tiene el Estado, ya que las consideran escasas por los trasposos a las autonomías. Pero las negociaciones siguen en marcha y podría haber novedades y cambios. Otros departamentos que están en liza son los de Cien-

Están son las dos comisiones en las que se decide qué llega al Consejo de Ministros

Antes de que los proyectos ministeriales lleguen para su aprobación o estudio al Consejo de Ministros, éstos pasan previamente por dos filtros fundamentales que ostentan un poder político y económico relevante: la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. En puridad, la primera está normalmente presidida por el ministro de Economía, y la segunda por la vicepresidencia. En cada

uno de estos órganos colegiados hay representación de los ministros de Hacienda, Fomento, Educación, Trabajo, Industria, Agricultura, Política Territorial, Transición Ecológica y Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el caso de la Comisión de Asuntos Económicos y, en el caso de la segunda comisión, son los secretarios y los subsecretarios los que participan en las reuniones, hasta ahora convocadas por Carmen Calvo. Entre las funciones de la Comi-

sión de Asuntos Económicos está estudiar los asuntos que requieren la elaboración de una propuesta previa y, estudiar medidas, elaborar, seguir y evaluar programas económicos generales o sectoriales. Lo crucial de esta comisión es que es el presidente de la misma quien tiene la potestad de definir la agenda y decidir qué llega a la comisión, y posteriormente al Consejo de Ministros. En el anterior Gobierno, esta competencia recayó en Mariano Rajoy.



cia y Universidades, e incluso Trabajo. Aunque en este caso se descarta que pueda conservar todas las atribuciones que hoy tiene el departamento que dirige Magdalena Valerio, cuyos dominios, además de las políticas laborales, ocupan también los ámbitos de la migración y, sobre todo, la Seguridad Social y las pensiones.

Respecto a sus miembros, parece consolidado que Irene Montero, portavoz parlamentaria de Unidas Podemos y número dos de los morados, será una de las ministras del Gobierno de coalición. Cabe recordar que en las negociaciones que se rompieron tras las elecciones de abril, Montero optaba a ser vicepresidenta por el veto decretado por Pedro Sánchez a Pablo Iglesias y que hoy ya no existe. También apunta para un cargo Yolanda Díaz, quien ya sonó como posible ministra durante la negociaciones del verano. Concretamente, para Trabajo, aunque hoy esto está todavía en el aire.

Por otro lado, la permanencia de los ministros socialistas dependerá, también, del reparto ministerial. Por ello hay algunos nombres que están en duda, como los de Pedro Duque, María Luisa Carcedo o incluso Magdalena Valerio. En cambio, Sánchez mantendrá, como se ha dicho antes, a Calvo. También a José Luis Ábalos, quien llegó a sonar

Entre los ministros socialistas que se espera que sigan están Montero, Ábalos y Ribera

como vicepresidente si el Gobierno hubiera sido puramente socialista, como deseaba el candidato del PSOE. Seguramente, mantenga su cartera de Fomento. También se espera que seguirán en sus puestos Margarita Robles en Defensa, Fernando Grande-Marlaska en Interior y Teresa Ribera, en Transición Ecológica. En cambio, no está tan claro el futuro de Isabel Celaá en Educación y como ministra portavoz, ni el de Dolores Delgado en Justicia, debido a las polémicas que han vivido al frente de sus responsabilidades en los últimos meses.

La gran incógnita

La gran incógnita está en María Jesús Montero. Se da por hecho que continuará al frente de uno de los Ministerios más importantes del Gobierno, Hacienda, pero también que Sánchez la quiere premiar por su labor, así que no es descartable que asuma alguna competencia más. En cualquier caso se da por hecho que, tras la sentencia de los ERE de Andalucía, el presidente en funciones impulsará que sea la sucesora de Susana Díaz, cuya figura está desgastada por el escándalo, al frente de los socialistas andaluces.

Blindaje a la Seguridad Social

● El Gobierno manobra para evitar que Unidas Podemos, si asume Trabajo, pase a controlar el organismo que gestiona 153.800 millones, el 42% del gasto del Estado ● Quiere darle más autonomía o que su control dependa de Hacienda

CÉSAR URRUTIA MADRID

El reparto de carteras en un futuro Gobierno de coalición entre Unidas Podemos y PSOE centra en la Seguridad Social la preocupación de una parte de la Administración y de las instituciones que advierten sobre el riesgo de empeorar el desequilibrio financiero de las cuentas públicas.

La inquietud se centra en la línea ideológica de un partido que, más allá de subir las pensiones, no considera la sostenibilidad del sistema y en el mensaje que esto trasladaría sobre un elemento capital para la credibilidad de los planes económicos del Gobierno. Pesa, además, la falta de perfiles técnicos y con experiencia para el puesto dentro de Unidas Podemos que, sin embargo, sí dispone de miembros con capacidad demostrada en otras áreas del ministerio como Migraciones o la Inspección de Trabajo.

Si el partido dirigido por Pablo Iglesias acaba las negociaciones con el Ministerio de Trabajo como trofeo, se barajan posibilidades que pasan por dotar al organismo que paga las pensiones de una mayor autonomía que la que tiene actualmente, pero siempre bajo control socialista, explican fuentes del Gobierno. Se ha llegado a poner sobre la mesa la posibilidad de incluir Seguridad Social en un ministerio como Hacienda, aunque la complejidad de la operación han llevado a explorar otras vías como reforzar desde Economía o Hacienda el control sobre su gestión, que incluye nada menos que 153.800 millones, el 42% del presupuesto del Estado y un renglón específico en los compromisos con la Comisión Europea de reducción de deuda.

Con las negociaciones para dividir las funciones en el Consejo de Ministros en el máximo sígilo, el único criterio claro hasta ahora es el de que el partido dirigido por Pablo Iglesias copará una vicepresidencia y hasta tres ministerios de «carácter social».

De las carteras candidatas a ser ocupadas por Unidas Podemos, Trabajo sería la de mayor relevancia ejecutiva y presupuestaria. Además de dirigir la relación con los agentes sociales de cara a los anunciados cambios en la reforma laboral, gestiona una caja única para todo el Estado que se financia a través de las cotizaciones de más de 19 millones de trabajadores afiliados. A este carácter vertebrador, la Seguridad Social suma una situación financiera que la hace estructuralmente deficitaria por los gastos que debe asumir para pagar un creciente número de prestaciones cada vez más altas. Gestionada actualmente como una Secretaría de Estado por Octavio Granado, su deuda superó en octubre por primera vez los 50.000 millones de euros, triplicando la cifra de 2016.



La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio, habla con Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados. BERNARDO OJAZ

DIFERENCIAS EN EL PACTO DE TOLEDO

PSOE, a favor de reformas. Aunque estén de acuerdo en derogar la reforma de 2013 y vincular las pensiones al IPC, el partido dirigido por Pedro Sánchez impulsó la pasada legislatura un acuerdo en el Congreso para impulsar reformas en el sistema de pensiones que garanticen la sostenibilidad del sistema.

Unidas Podemos, en contra. El partido dirigido por Pablo Iglesias hizo saltar por los aires cualquier posibilidad de acuerdo al lanzar una enmienda a la totalidad de lo acordado.

Nueva etapa. En un hipotético Gobierno de coalición ambos tendrían que corregir sus postulados para conciliar posiciones antagónicas.

Aunque desde 2012 Trabajo ha evolucionado hasta convertirse en un ministerio de mayor perfil económico que social, la importancia estratégica que el partido morado da a la cartera ahora ocupada por Magdalena Valerio ya quedó en evidencia el pasado mes de julio. El propio Pablo

CALVIÑO, EN LA DIANA DE LOS SINDICATOS

Nadia Calviño, ministra de Economía, cuenta ya entre los sindicatos con la consideración de que es el último y probablemente mayor obstáculo que deben salvar para hacer realidad sus demandas. Los encontronazos se acumulan sobre todo tipo de cuestiones, desde la reforma laboral a la política de vivienda. El último choque se ha producido a cuenta de las indemnizaciones por despido que plantea la normativa desde 2012. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, recordó ayer a Calviño, que la indemnización por despido para «casi un 30% de los trabajadores, principalmente mujeres, «es cero» debido a que cuentan con contratos temporales, por lo que le aconsejó «conocer más a fondo» qué ocurre en España con el coste del despido, después de que esta considerara «relativo» que la indemnización

Iglesias reclamó la gestión de las políticas activas de empleo en un último intento desesperado por pactar una coalición con Pedro Sánchez.

Ahora, la posibilidad de que el nuevo entendimiento entre Sánchez e Iglesias que vaya más allá de esos términos inquieta en círculos del Gobierno, la Administración y ciertas instituciones. «Si es un gobierno corto y las medidas que adopten tienen escaso impacto presupuestario a corto plazo, no se generará mucha inquietud en los mercados, aunque el problema será la herencia que dejen y el déficit a futuro, por la ausencia de medidas correctoras», explican desde una gran entidad financiera.

actual de 20 días sea «muy barata», informa Europa Press

Instantes antes de participar en una jornada sobre el Corredor Atlántico organizada por su sindicato en Valladolid, Álvarez recordó que hay una mayoría en las Cortes Generales refrendada en los últimos comicios, y «bastante parecida» a la que había antes, de partidos que llevaban en sus programas la derogación de las reformas laborales, por lo que ha advertido de que los sindicatos van a «exigir» que eso «se cumpla».

Calviño comparó esta semana el coste del despido en España con los países del entorno, para apostar por analizar la situación de los trabajadores españoles y europeos de forma global en lugar de atender sólo a las condiciones laborales. En cualquier caso, Álvarez insistió en que reclamarán al próximo Ejecutivo la «derogación completa» de estas reformas como «punto de partida» para poder negociar un nuevo marco de racionalización de las relaciones laborales.

«Si las medidas aumentan el déficit a corto y a largo plazo con intensidad, el efecto en los mercados sería más inmediato. Un ejemplo sería derogar las reformas de 2011 y 2013. Esta posibilidad sería valorada negativamente por la Comisión, FMI y agencias de rating como un evento de crédito negativo», concluyen.

El programa económico de Podemos se centra por un lado, en la subida generalizada de pensiones (jubilación, viudedad, mínimas, no contributivas) y en blindar una garantía de revalorización de las prestaciones vinculada al IPC. Es una receta contra la que han advertido el Banco de España, la AIREF y el FMI, entre

otras instituciones, que piden reformas para hacer sostenible el sistema de pensiones.

En opinión de las fuentes del Gobierno consultadas, tampoco ayuda el hecho de que el partido morado fuera precisamente el que el pasado mes de febrero dinamitó el Pacto de Toledo cuando estaba a punto de cuajar un acuerdo de reformas para los próximos cinco años. Precisamente la ferrolana Yolanda Díaz, una de las diputadas que votó la enmienda a la totalidad del pacto de las pensiones es la más citada en las quinielas oficiosas como posible candidata a ocupar el puesto de relevancia en Trabajo.



Las empresas sopesan pagar ya los dividendos para evitar más impuestos

Con la coalición, las filiales tributarían un 1,25% más sobre el 5% de su renta

Xavier Gil Pecharromán VALENCIA

Las empresas debaten estos días la posibilidad de adelantar el pago de dividendos a diciembre con la intención de evitar la subida de impuestos acordada el año pasado en el pacto presupuestario acordado por PSOE y Podemos y tras los anuncios de que un nuevo Gobierno de ambas formaciones pueda elevar los impuestos. Las sociedades quieren evitar así una posible tributación del 5 por ciento de los dividendos repatriados del exterior con la que el Ejecutivo calcula que para el año que viene podría recaudar 1.776 millones en un año. Está prevista una reducción de la exención a los dividendos de las filiales extranjeras de empresas españolas que ya han tributado en el extranjero del 100 por ciento al 95 por ciento, lo que excluiría de la exención ese 5 por ciento del dividendo.

Una posibilidad en peligro

El decano del Colegio de Economistas de Valencia, Juan José Enríquez, reconoció en su intervención en las XXIII Jornadas Nacionales del Registro de Economistas Asesores Fiscales que se celebra en Valencia que "existe un cierto interés en mover dividendos en diciembre antes de que se pueda producir una reforma impositiva que eleve la tributación".

No obstante, Luis del Amo, secretario general del Reaf, advierte de que, si en lugar de incorporar esta subida de impuestos a los Presupuestos de 2020, el Ejecutivo opta por aprobarlo a través de un decreto-ley antes de que acabe el año, adelantar el pago de dividendo no serviría de nada.

El año pasado puede que se produjese este mismo efecto, tal y

como se puede comprobar en el informe de recaudación de diciembre en la Agencia Tributaria. En esas fechas, PSOE y Podemos preveían aprobar esta medida en los Presupuestos Generales del Estado para 2019, que finalmente no fueron avalados por el Congreso de los Diputados.

En su intervención, el decano valenciano ha solicitado un régimen transitorio, puesto que estima que con esta rebaja en la exención en los dividendos y las ganancias de capital que se obtengan las filiales españolas en el extranjero tributarían a un tipo efectivo del 1,25 por ciento (que se obtiene de multiplicar el 5 por ciento de la renta

El decano de los economistas valencianos avisa frente a un posible efecto en cascada

de la sociedad por un tipo del 25 por ciento, que es el tipo en tarifa, el tipo nominal).

El denostado ITE

Así, si la filial repartiese este dividendo a las compañías más elevadas en la pirámide del grupo y estas a su vez lo hiciesen también, hasta llegar a la matriz, compañía superior a compañía superior, tributando por ese 1,25 por ciento hasta acabar en la matriz, se produciría un efecto en cascada, que llevaría a que se acabase tributando por el 5 por ciento. El decano de los economistas valencianos ha recordado que este mismo efecto se daba hace años con el "denostado" Impuesto sobre el Tráfico de Empresas.



Juan José Enríquez, decano del Colegio de Economistas de Valencia. EE

La memoria anual de recaudación de la Agencia Tributaria muestra que la exención de doble imposición es la partida que más afecta al cálculo de la base imponible del Impuesto de Sociedades y, por tanto, la que más contribuye en las grandes empresas a la gran diferencia entre el tipo efectivo (6,14 por ciento) y el nominal (25 por ciento).

Las cifras de recaudación de la Agencia revelan que las sociedades registraron un resultado contable positivo de 198.202 millones de euros durante 2016, último año con datos disponibles. De esta cantidad, las empresas se descontaron 105.332 millones por dividendos y beneficios recibidos de sus filiales en otros países para evitar la doble imposición.

El artículo 4.3 de la Directiva matriz-filial (Directiva 2011/96/UE del Consejo, de 30 de noviembre de 2011, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes) otorga a los Estados miembros de la UE la posibilidad de reducir la exención siempre que su cuan-

El ejercicio pasado ya se registró un adelanto similar, aunque Gascón dice desconocerlo

tía no exceda el 5 por ciento de los dividendos, que es lo propuesto por Unidas Podemos y aceptado por el PSOE en el proyecto de Presupuestos de 2019.

Por su parte, el director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, desmintió que haya observado este efecto, al considerar que el mayor reparto de dividendos a finales del año pasado se debió a varias grandes operaciones que tuvieron lugar en esas fechas. Sin embargo, en el informe de recaudación de la Agencia de diciembre de 2018, así se comentaba.

ⓐ Más información en www.economista.es/ecoley

Los economistas exigen reformas al próximo Gobierno

Consideran urgente actualizar la financiación local y autonómica

X. G. P. VALENCIA.

El Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) ha publicado un listado de cuestiones que consideran que son ineludibles por el próximo Gobierno entre las que des-

tacan: la reforma de la financiación autonómica y de las Haciendas locales; la tributación de la riqueza y ambiental; así como algunos retos en el Impuesto sobre Sociedades e intensificar la prevención del fraude fiscal.

Según ha explicado Luis del Amo, secretario general del Reaf, en la presentación de este informe -en el transcurso de las XXIII Jornadas Nacionales del Reaf con respecto a la tributación de la riqueza-, los

asesores fiscales proponen que se dé coherencia a la aplicación del Impuesto sobre el Patrimonio, empezando por si se considera conveniente su existencia y continuidad o no.

El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha advertido de que las ineludibles reformas fiscales que el nuevo Ejecutivo tendrá que abordar no pueden perder de vista el mantenimiento de la senda de consolida-

ción fiscal, preservando el crecimiento económico del que venimos disfrutando desde hace unos años.

Sucesiones y Donaciones

Pich ha abogado por que se decida si el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones tiene lugar en el sistema tributario español y, de ser así, acabar con las grandes diferencias territoriales que plantea. También, se propone revisar la estructura del

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Matriculación y la Imputación de Rentas Inmobiliarias en el IRPF, para lograr una mayor seguridad jurídica y una cierta armonización.

Tanto Pich, como el decano del Colegio de Economistas de Valencia, Juan José Enríquez, han apostado por que "no haya tantas diferencias en los impuestos propios de las comunidades autónomas, ya que es necesario armonizarlas".



BBVA Research anticipa una subida de la tasa de desempleo

CINCO DÍAS
MADRID

El servicio de estudios BBVA Research anunció ayer que la economía española podría crecer un 0,4% en el último trimestre del año, lo que haría que el crecimiento anual se situara "en torno" al 2%, en línea con las nuevas previsiones de la OCDE.

No obstante, tras el incremento del paro en octubre —cuando subió en 97.948 personas, pese

a que en los últimos 12 meses descendió en 77.044, mientras que el empleo marcó el segundo mejor octubre con 106.500 nuevos afiliados—, la firma de análisis advierte de que si no se corrige esa tendencia, podría darse un aumento del desempleo en el cuarto trimestre del 0,2%. Se trataría del primer incremento trimestral del paro desde el segundo trimestre de 2013.

Prevé que en los últimos tres meses del año la ocupación crezca entre un

0,5% y un 0,6% respecto a los tres meses anteriores, pero alerta de que si el paro no corrige su tendencia al alza de octubre, ello supondría "el primer incremento trimestral del paro registrado desde el segundo trimestre de 2013".

En sus estimaciones, el departamento de análisis prevé que España cierre el año con una tasa de paro del 14,1% y que la creación de empleo avance a un 2,2%, para aminorar al año que viene hasta el 1,4%.

0,4%

subirá el PIB en el último trimestre

Estima que en el año la economía española avance un 1,9%, para suavizarse hasta el 1,6% el ejercicio siguiente.

BBVA Research considera que los indicadores de gasto y expectativas de los consumidores y los registros del mercado laboral respaldan una "estabilización" del consumo privado. Mientras, los datos de ejecución presupuestaria sugieren que el consumo público "se moderaría", tras el repunte registrado en el tercer trimestre. En cuanto a la inversión, la residencial se estancaría y la inversión en maquinaria y equipo retrocedería.

Sobre las exportaciones, afirma que "podrían mostrar un tono menos negativo durante el cuarto trimestre del año". Apunta en todo caso que "la incertidumbre sobre el contexto internacional sigue siendo elevada, lo que podría afectar al comercio durante los próximos meses".

Respecto a la inflación, estima que aumente "marginalmente" en noviembre, hasta el 0,2% o el 0,3% sobre el mismo mes del año anterior.



TENSIONES COMERCIALES

La fatiga económica estanca el avance de las exportaciones

El Club de Exportadores llama a la estabilidad ante el alza de ventas del tercer trimestre del 1,6%, la mitad que en 2018

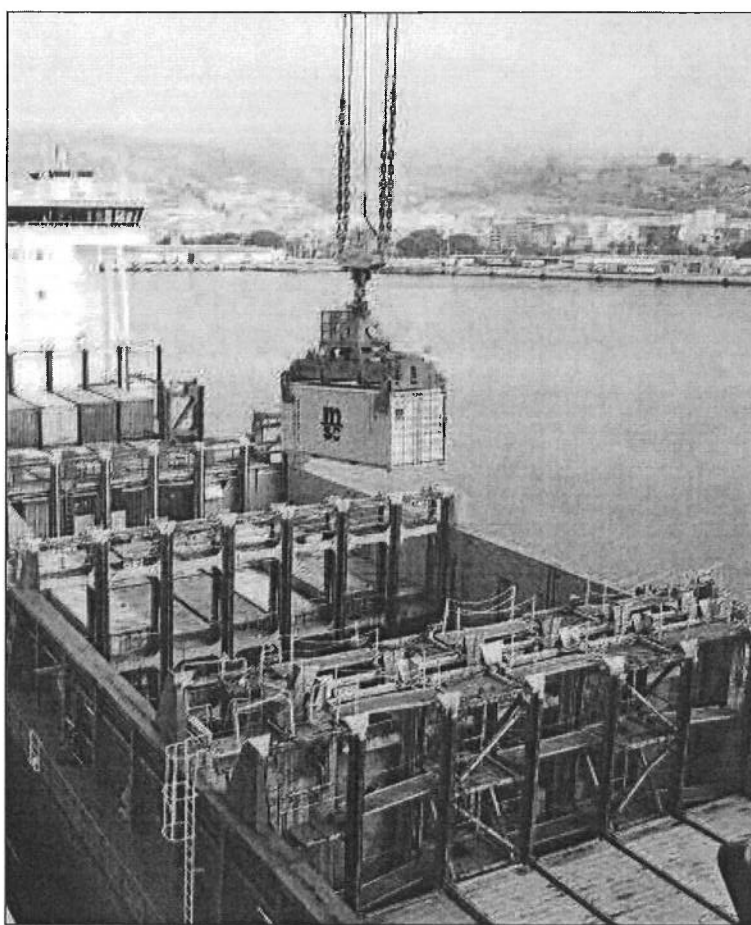
G. V. MADRID.

El efecto de la guerra comercial, que ha impactado de lleno en las relaciones comerciales de España con el exterior y la propia desaceleración de la economía global, está causando estragos en comercio de nuestro país con el exterior. Así, el déficit comercial se situó en 25.446 millones de euros hasta septiembre, lo que supone un incremento del 5,2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Este incremento se produce a pesar del alza del 1,6 por ciento de las exportaciones, hasta los 215.000 millones de euros -nuevo máximo histórico- y tras el repunte del 2 por ciento de importaciones, hasta los 241.046 millones. Lo que deja la tasa de cobertura en el 89,4 por ciento.

La secretaria de Estado de Comercio en funciones, Xiana Méndez, destacó que las exportaciones españolas continúan creciendo a pesar del contexto internacional "complejo", lo que indica la "fortaleza" del sector exterior, al tiempo que resaltó el comportamiento "muy positivo" de mercados de destino como Norteamérica y Asia, que refuerzan los objetivos del Plan Bienal de Internacionalización 2019-2020 y de los planes *Países con Actuación Sectorial Estratégica*.

El Ministerio destaca que el crecimiento de las exportaciones españolas entre enero y septiembre fue mayor que en Alemania (+0,9 por ciento) y Reino Unido (-0,7 por ciento), pero menor que en Francia (+4,1 por ciento), Italia (+2,5 por ciento), la Unión Europea (+2,4 por ciento) y la zona euro (+2,2 por ciento). Las exporta-



Carguero en el puerto de Almería. EUROPA PRESS

Reino Unido acusa los latigazos del 'Brexit' con un retroceso del 0,7% en ventas exteriores

ciones dirigidas a la UE (65,8 por ciento del total) crecieron un 1,6 por ciento en los nueve primeros meses del año, mientras que las ventas a la zona euro (51,4 por ciento del total) ascen-

dieron un 1,1 por ciento, y las destinadas al resto de la UE (14,5 por ciento) aumentaron un 3,5 por ciento.

"Es innegable que el contexto internacional es complejo. Se está registrando una ralentización del comercio a nivel mundial, fruto del auge del proteccionismo, a lo que se suma la incertidumbre por el *Brexit* y la debilidad económica de Alemania, entre otros factores", señaló el presidente del Club de Exportadores, Antonio Bonet, exigiendo la conformación de un Gobierno "estable" cuanto antes.

La industria española del automóvil redujo su superávit comercial hasta 2.440 millones de euros en los nueve primeros meses del año



La balanza comercial del motor cae un 34% en un año En los nueve primeros meses la bajada fue de un 2,7%. Sólo en septiembre, un 22%

La automoción pierde 825 millones en exportaciones

J. de Antonio - Madrid

La ralentización económica ha llegado al sector del automóvil. Mantiene sus resultados en superávit comercial, pero ya nota el parón de las exportaciones. Hasta septiembre, la industria española de este sector –que incluye automóviles, motocicletas y componentes– alcanzó un superávit comercial de 2.440 millones de euros, lo que supone una caída del 33,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior, o lo que es lo mismo, 825 millones que se han quedado por el camino

por culpa del empeoramiento de las perspectivas económicas, la inconcreción de los gobiernos para legislar el futuro tecnológico y medioambiental de los vehículos, y el acoso al diésel.

Las exportaciones del sector experimentaron un retroceso del 2,7% en los nueve primeros meses del año, hasta alcanzar 32.768 millones de euros. Por contra y en este mismo periodo, las importaciones de vehículos y componentes alcanzaron los 30.328 millones de euros, un 1,1% más en comparación con los mismos meses del año precedente.

Si se extrapolan únicamente los datos de los fabricantes automóviles y motocicletas –dejando al margen los componentes– el superávit comercial cayó casi un 12% en el tercer trimestre, y se situó en 7.628 millones de euros. La industria auxiliar sufrió un poco menos y se anotó un déficit comercial de un 4,4%, alcanzando los 5.188 millones.

Las patronales del sector han

trasladado su preocupación por esta situación reiteradas veces a lo largo del año, con la intención de que se tomen medidas correctivas al respecto, aunque en sus últimos comunicados auguraban una mejora de la situación en el último trimestre. Y los últimos datos parecen darles la razón.

Solo en septiembre, el sector español de la automoción contabilizó un superávit comercial de 559,7 millones de euros, lo que representa un aumento del 22,2% respecto al noveno mes de 2018. Y octubre fue aún mejor, registrándose un superávit de 1.150 millones de euros, un 44,9% más. Peor le fueron las cosas a la industria auxiliar, ya que su déficit comercial aumentó un 76%, hasta 591 millones de euros.

En términos globales de todos los sectores de producción nacionales, el déficit comercial entre enero y septiembre alcanzó los 25.446 millones de euros, un 5,2% más respecto al registrado en el mismo periodo de 2018.



Almazara cordobesa

JAIME GARCÍA

España dejará de exportar 150.000 toneladas de aceite de oliva cada año

► La guerra arancelaria pasa factura a uno de los sectores más punteros

CARLOS MANSO CHICOTE
MADRID

La polémica política arancelaria de Estados Unidos, que aplica desde el pasado 18 de octubre aranceles del 10% y el 25% a una prolija lista de productos comunitarios entre los que se encuentra el aceite de oliva español como represalia por las ayudas públicas concedidas a Airbus por parte de varios países europeos (Alemania, Francia, España...), tendrá un fuerte impacto sobre las exportaciones españolas. Al menos, sobre el olivar. Según la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva (Asoliva), España dejará de exportar unas 150.000 toneladas al año de este producto. Una caída de las ventas que desde la patronal de los exportadores de aceite de oliva va tener «graves consecuencias económicas» que comienzan a percibirse. Por este motivo exigen tanto a Bruselas como al Gobierno «un plan de choque» para reparar los perjuicios que ya están causando estos gravámenes.

En concreto, desde Asoliva avisa-

«pérdidas» de no revertirse la situación y de que corren riesgo «numerosos puestos de trabajo». En este sentido denunciaron la ausencia de «un periodo transitorio para la entrada en vigor de estos aranceles» y constataron que muchas empresas españolas se verán afectadas por los aranceles y tendrán que renegociar con sus clientes asumiendo fuertes pérdidas.

Mal dato de comercio

Todo ello, en un momento en el que las exportaciones españolas marcaron en el acumulado de los nueve primeros meses del año un alza del 1,6% hasta los 215.000 millones de euros, un nuevo máximo histórico. Lo que no compensó el repunte de un 2% de

las importaciones durante este tiempo, hasta los 241.046 millones de euros.

Estas cifras se traducen en un incremento del déficit comercial, que se situó hasta septiembre en 25.446 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,2% respecto

al mismo periodo del año anterior, según publicó ayer el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Señalaron también desde Industria que el crecimiento de las exportaciones españolas entre enero y septiembre fue mayor que en Alemania (+0,9%) y Reino Unido (-0,7%), pero menor que en Francia (+4,1%), Italia (+2,5%), la Unión Europea (+2,4%) y el conjunto de la Eu-

ECONOMÍA Y TRABAJO

Un nuevo estudio anticipa que los trabajadores de alta cualificación afrontarán los mismos desafíos que el resto

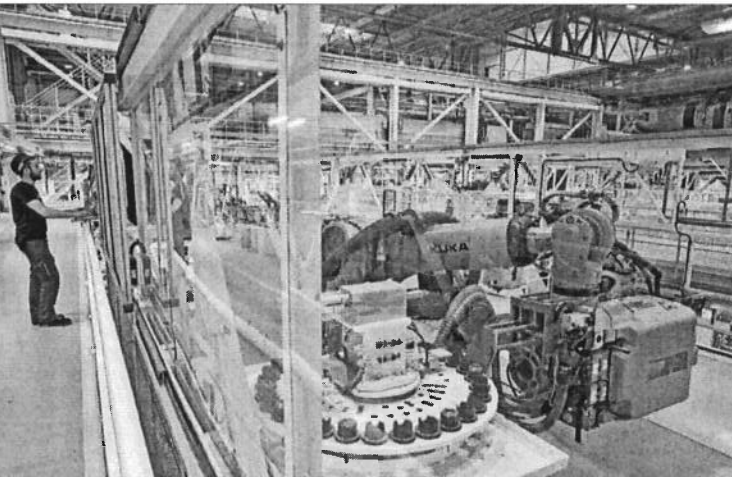
Los robots también suplantarán a los ingenieros

SANDRO POZZI, Nueva York
La automatización crea angustia. A siete de cada 10 estadounidenses les preocupa que un robot o un ordenador asuman sus trabajos, y por eso creen que debe limitarse su adopción. Hasta ahora se advertía de que los empleos peor remunerados y de baja cualificación eran los más vulnerables ante el efecto de la robotización. Pero un nuevo estudio elaborado entre la Universidad de Stanford y el Brookings Institution (de Estados Unidos) anticipa que la inteligencia artificial tendrá un efecto mayor de lo que se pensaba en tareas de oficina de alta cualificación bien pagadas.

Nadie es inmune a la irrupción de la automatización en el empleo. Suele ser un proceso traumático. Así de rotundo se expresa Mark Mauro, investigador de la Brookings Institution, al presentar un estudio elaborado con una nueva técnica de análisis desarrollada por el profesor Michael Webb, de la Universidad de Stanford. Su modelo se desvía del patrón establecido hasta ahora y concluye que serán los trabajadores mejor educados y con sueldos relativamente altos los más expuestos a las nuevas tecnologías.

Son aquellos ocupados con título universitario, considerados empleados de clase media o superior, como gestores de ventas, supervisores, programadores, abogados, ingenieros y analistas. "La inteligencia artificial será tan central para los empleos de oficina como la robótica lo ha sido para la economía de producción", anticipa Mauro desde Brookings. Y añade que "cambiará fundamentalmente lo que es el trabajo y lo que hacen los humanos".

Hay diversos análisis que tratan de anticipar el impacto futuro de máquinas que aprenden, razonan y se programan solas. El análisis de Webb utiliza como referencia 769 ocupaciones y a partir de ahí, examinando factores como las patentes, determina que 740 categorías laborales están "expuestas y pueden verse complementadas o completadas por la inteligencia artificial". La conclusión es que los empleos ad-



Un operario controla a los robots que trabajan en una planta de Airbus en Hamburgo. / C. CHARISIUS (GETTY)

ministrativos están más en peligro de lo que se pensaba.

Es un hecho que esta tecnología transformará el mercado laboral. La automatización plena será menos significativa que la reorganización que experimentarán los negocios, según coinciden todos los expertos. Es decir, sustituirá funciones más que trabajos. "El impacto será significativo en prácticamente todo el mercado laboral", y su efecto "no se distribuirá de una manera uniforme", insiste Webb en su informe del grupo de reflexión.

Sectores. Se calcula que la mayor presión recaerá sobre el 18% del empleo en EE UU, el equivalente a 25 millones de ocupados. El 34% de la mano de obra (unos 48 millones de trabajadores) podrá experimentar un impacto medio. Para el 48% de los asalariados (67 millones), el efecto de la

Para la mitad de los asalariados el efecto de la disrupción tecnológica será bajo

La automatización sustituirá funciones más que trabajos y no será uniforme

disrupción tecnológica será bajo. Los empleados de élite, como los consejeros delegados y altos ejecutivos, estarán de alguna manera protegidos.

Industrias. Las más expuestas por la automatización son la manufactura, la agricultura, el transporte y la extractiva. La historia cambia cuando se analiza el impacto en los servicios profesionales y técnicos mejor pagados, donde la Inteligencia Artificial contribuye a optimizar los procesos y elimina duplicidades. Son ocupaciones donde los hombres están sobrerrepresentados.

El modelo de Webb completa, por tanto, estudios como el realizado por PwC, en el que explora los retos potenciales de la automatización durante las próximas décadas. Este estudio indica que el 38% de los empleos en EE UU podrían ser "automatiza-

bles". El impacto a corto plazo se sentirá más en los servicios financieros, donde los algoritmos permiten hacer análisis y funciones más eficientes. Las menos afectadas serían áreas como la salud o la educación, que dependen del toque humano.

Los más vulnerables, augura PwC, serán los empleados con el nivel más bajo de formación. Brookings, sobre la base del análisis de Webb, no cuestiona del todo esta tesis. Pero sí señala que hay "numerosos empleos de baja remuneración" que estarán relativamente poco expuestos a la expansión de la automatización digital e insiste en que las ocupaciones no productivas mejor pagadas afrontarán los mismos retos.

Mejor formación. Mauro concluye, en todo caso, que los trabajadores con mayores ingresos estarán mejor preparados para navegar este cambio tectónico en el mercado laboral, porque podrán acceder a una mejor formación. Brookings admite que su análisis introduce nuevos "enigmas" sobre la irrupción de la automatización, pero considera que estos trabajos son necesarios para entender su implicación.

Más desigualdad. Esta dicotomía se refleja en las encuestas. Un reciente sondeo de Pew Research muestra que la mayoría de los trabajadores de EE UU no cree que su trabajo vaya a ser hecho por robots o computadoras. Solo un 37% dice que sucederá en los próximos 30 años y se trata principalmente de empleados que no tienen estudios superiores. La mitad de los ocupados con salarios muy bajos también lo dan por hecho.

La encuesta de Pew, como reflejo de esta incertidumbre, muestra también que tres cuartas partes de los estadounidenses anticipan que la automatización incrementará la desigualdad. También dudan (un 66%) cuando se les pregunta si esperan que con la automatización se creen nuevos empleos y mejor pagados. Y aunque los que tienen una educación superior son más optimistas, tampoco lo ven tan claro.

OPINIÓN / JOSÉ CARLOS DÍEZ

La era del dato

Cada semana se generan 17,5 exabytes en el mundo, el equivalente a 1,5 millones de veces los datos de la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. En los años ochenta, acumular un gigabyte en un disco duro costaba unos 50.000 dólares, hoy cuesta dos céntimos de dólar. En los años noventa, el equipo para procesar un teraflop, un billón de operaciones de coma flotante por segundo, en la nube costaba unos 70.000 dólares. Hoy es la misma capacidad que tiene una videoconsola que cuesta 300 dólares. El satélite *Hubble* tenía en 1990 una cámara con 0,64 megapíxeles; los teléfonos móviles tienen cámaras de 12 megapíxeles.

Desde que se inició el uso del papiro en Egipto hasta la invención de la imprenta en 1440 pasaron 2.000 años. Estamos en medio de una revolución tecnológica sin precedentes desde entonces. La llegada de la imprenta generó riesgos en los monasterios, los venerables Jorge de *El nombre de la rosa* y la Inquisición perdieron influencia. Pero la humanidad abandonó el ostracismo de la Edad Media y comenzó la luz del Renacimiento, luego la Ilustración y la ciencia.

España siempre ha llegado tarde a todas las revoluciones científicas, y la del dato no es una excepción. Salvo honrosas excepciones, las empresas españolas si-

guen pensando que la revolución digital es tener una página web y que un *chatbot* es una marca de ropa deportiva. Europa tiene una regulación de protección de datos personales mucho más restrictiva que EE UU y China. Por eso me ha sorprendido negativamente la polémica generada por la acertada decisión del Instituto Nacional de Estadística (INE) de usar datos geolocalizados de nuestros teléfonos móviles para complementar su estadística del Censo de Población y los flujos de movimiento de población.

El temor es que el INE nos espía. El INE siempre ha realizado encuestas en las que nos pregunta adónde vivimos, nuestro gusto en consumo o nuestra situación laboral. Los movimientos de la población son determinantes para saber, por ejemplo, cuánta gente que vive en la periferia de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao o Sevilla trabaja en el centro de la ciudad. Eso permite planificar cuántas li-

neas de metro hay que tener o la frecuencia de los autobuses públicos.

Para realizar ese mismo análisis, el INE tendría que subcontratar empresas privadas que hacen encuestas con un coste mínimo de 10 millones de euros. Los datos geolocalizados de móviles les permite tener más calidad de datos, y el coste es infinitamente menor que con el sistema analógico. Los datos son anónimos, por tanto, el INE no sabe quiénes somos, solo sabe dónde estamos y adónde vamos cada mañana y durante el día.

La guerra económica mundial se juega en la industria del dato y la inteligencia artificial. España juega en la segunda división de esa liga mundial. Europa va a aprobar un plan para competir con EE UU y China en este campo. O nos subimos a ese tren o estaremos condenando a nuestros jóvenes a salarios precarios de por vida, y el talento seguirá huyendo de nuestra querida España.

Barcelona, la tercera ciudad europea preferida para crear una 'start-up'

La firmas españolas captaron 1.211 millones en el 2018, igual que el año anterior

ROSA SALVADOR
Barcelona

Barcelona es la tercera ciudad europea preferida para crear una *start-up*, según un informe sobre el estado del sector tecnológico en Europa realizado por Atómico, uno de los mayores fondos tecnológicos del mundo dirigido por el fundador de Skype. Según el informe, la capital catalana está sólo por detrás de Londres y Berlín, las dos ciudades preferidas por los emprendedores, y por delante de París, Amsterdam, Lisboa, Munich y Milán entre otras. Madrid, por su parte, ocupa el puesto doce.

El informe refleja que la capital catalana es también la sexta en Europa por el número de compañías que han recibido financiación en los últimos cinco años: 437 empresas, muy lejos de las 2.747 de Londres y por detrás de París, Berlín, Estocolmo y Amsterdam. En volumen de inversión, la ciudad es la séptima, con 688 millones de dólares, lejos de la capital británica, que lidera con 8.203 millones.

El informe *Situación del sector tecnológico europeo 2019* señala que el año pasado las tecnológicas europeas captaron una inversión récord de más de 34.300 millones de dólares (30.993 millones de euros), lo que supone un 39% más que en el 2017, pese a "la volatilidad del mercado" que ha introducido la guerra comercial entre Estados Unidos y China. También se ha alcanzado una cifra récord de inversiones que superaron los 100 millones de dóla-



Ambiente de trabajo en el Pier 01 de Barcelona Tech City

res, con 53 empresas, frente a las 32 del año pasado.

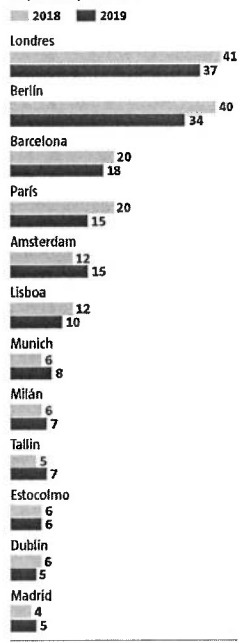
En España, en cambio, las *start-ups* tecnológicas captaron 1.211 millones de euros, con un ligero descenso del 0,17% respecto al año anterior debido en parte a que hubo operaciones especialmente importantes en el 2017, como la de Letgo, de 390 millones de euros.

El informe destaca que España se

encuentra lejos de los estándares europeos en densidad de desarrolladores e investigadores per cápita, ya que tiene tres investigadores y siete desarrolladores por cada 1.000 habitantes, cifra similar a la de países como Grecia, Polonia y Hungría. Por el contrario, Dinamarca cuenta con ocho investigadores y 17 desarrolladores por cada 1.000 habitantes.

LAS CIUDADES PREFERIDAS PARA FUNDAR UNA 'START-UP'

En porcentaje de votos



FUENTE: State of Europe Tech LA VANGUARDIA

Aun así, Barcelona recibió 36.961 dólares (33.399 euros) en capital por desarrollador, siendo la cuarta ciudad, detrás de Londres, Estocolmo y Berlín en capital invertido por talento en los últimos cinco años.

El desarrollo del sector ha hecho aumentar un 5% la cifra de desarrolladores en España, hasta casi 323.000 personas, una cifra que está por debajo de las necesidades de las empresas: Atómico señala que han aumentado un 15% las vacantes difíciles de cubrir de ingenieros de software, el tercer mayor incremento en Europa, sólo por detrás de Austria y Portugal.

Londres, líder indiscutible de la innovación en Europa, cuenta con el hándicap de los altos costes salariales y del precio de las oficinas, dos factores en cambio que fundamentan el atractivo de Barcelona y Madrid para captar nuevas empresas. Así, en Londres el coste medio de una *start-up* en salarios y alquileres es de 2,8 millones de dólares anuales, mientras que en Barcelona

España está por debajo de la media de la UE en profesionales y suben un 15% los puestos difíciles de cubrir

sería de 1,85 millones y en Madrid de 1,8 millones, porque aunque las oficinas son más caras que en Barcelona los salarios de los profesionales tecnológicos son más bajos.

El informe destaca también que la innovación se está "descentralizando", y las seis ciudades preferidas han perdido puntos en la preferencia de los inversores a favor de ciudades menos conocidas, especialmente de Europa central y del este, como Darmstadt y Nurnberg (Alemania), Iasi (Rumanía), Montpellier (Francia) o Aarhus (Dinamarca).

eP Panorama ECONOMÍA

Preacuerdo de coalición

El Gobierno mantiene su plan en Bankia pese a Podemos

El Ejecutivo pretende privatizarla «sin prisas» pese a que su socio quiere nacionalizarla

La fuerte caída del banco en bolsa hace más atractiva una fusión que la venta

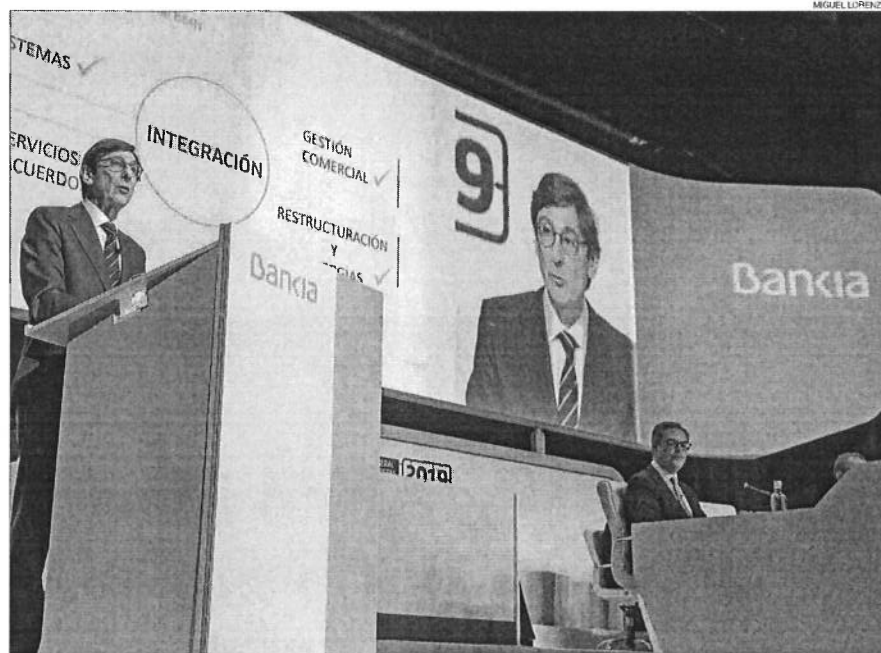
P. ALLENDESALAZAR / R. SÁNCHEZ
MADRID

El Gobierno mantiene sus planes de privatizar Bankia pese al preacuerdo alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos para formar un nuevo Ejecutivo liderado por los socialistas, según han confirmado fuentes del mismo a EL PERIÓDICO. El partido liderado por Iglesias lleva años proponiendo convertir la entidad nacionalizada en un banco público de forma permanente, y así lo incluyó en su último programa electoral, pero sus nuevos socios no tienen intención de ceder en este punto y solo apuestan por reforzar el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

La posición del Ejecutivo en funciones supone un alivio para la entidad encabezada por José Ignacio Goirigolzarri, de la que el Estado posee un 61,8% del capital. Tras el anuncio, la semana pasada, del pacto alcanzado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, sus acciones cayeron con fuerza en bolsa (un 8,3% en tres sesiones) por las dudas de los inversores sobre el futuro de la entidad. La propuesta de Podemos incluye cesar al actual presidente y que una mayoría de tres quintos del Congreso elija un sustituto -que si sea capaz de entender el rol que debe desempeñar la banca pública en la mejora del país.

RECUPERAR EL MÁXIMO / Sin embargo, Nadia Calviño, ministra de Economía y futura vicepresidenta si PSOE y Unidas Podemos logran apoyo parlamentario para formar Gobierno, ha dejado claro desde que asumió el cargo a mediados del 2018 que no comparte esa postura. La exalta funcionaria europea apuesta por privatizar, a lo que también insta la troika (CE y BCE) como mejor forma de reforzar el sistema bancario español; según reiteraron las autoridades comunitarias en julio.

Calviño, eso sí, ha puntualizado en los últimos meses que «no hay prisa» por vender y que su principal objetivo es recuperar



►► El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, en la junta general de accionistas, el pasado mes de marzo.

El programa del PSOE habla de reforzar el ICO como banca pública

►► El Gobierno no está dispuesto a nacionalizar Bankia de forma permanente como pretende Unidas Podemos, pero quiere reforzar el papel del Instituto de Crédito Oficial (ICO) como eje único de la banca pública. De hecho, en el programa electoral del PSOE se incluye el compromiso de crear una «entidad pública de financiación de la innovación, el emprendimiento, la transformación digital y la transición ecológica que integre los programas y entidades públicas de crédito existentes».

►► El ICO fue creado en 1962 y está encargado de «promover actividades económicas que contribuyan al crecimiento, al desarrollo del país y a la mejora de la distribución de la riqueza nacional». La entidad concede préstamos a autónomos, pymes y empresas de forma directa o a través de los bancos tradicionales. También gestiona los instrumentos de financiación oficial del Estado, así como los créditos de la Administración a los «afectados por catástrofes naturales» y supuestos de interés general.

el máximo dinero posible de los 24.069 millones inyectados al grupo. La entidad, defendió en agosto, está «bien gestionada, con un equipo muy profesional y con unos resultados financieros muy en línea con el resto del sector», por lo que no hay «presión para tomar esa decisión, y menos si puede ser perjudicial para los españoles».

El problema es que la cotización bursátil de los bancos lleva hundiéndose desde hace años por los tipos oficiales de interés negativos con los que el Banco Central Europeo (BCE) trata de evitar la desaceleración económica. A Bankia le ha golpeado de forma especial por no tener negocio internacional (como Santander y BBVA) y por el elevado peso de las hipotecas en su

balance, frente a otras entidades que tienen una mayor proporción de seguros o crédito a empresas, por ejemplo. El banco nacionalizado ha caído el 72% en bolsa desde que los tipos entraron en negativo en junio del 2014, frente al 52% del Santander, el 51% del BBVA, el 42% de CaixaBank y el 57% del Sabadell.

ALTERNATIVAS / Ayer, la participación del Estado en Bankia apenas valía unos 3.275 millones de euros. Que el Gobierno vendiese sus acciones en el mercado, como el Ejecutivo de Rajoy hizo en el 2014 y el 2017, conllevaría ahora la pérdida de 17.711 millones en ayudas (descontado los 3.083 millones que el banco ha pagado a su matriz, BFA, que es 100% pública).

<<<

IMPACTO PARA EL ESTADO

Como el BCE volvió a bajar los tipos en septiembre, las perspectivas para su evolución bursátil no son positivas para los próximos dos años. El Gobierno puede volver a retrasar el plazo máximo para privatizarla, actualmente fijado a finales del 2021, como ya se hizo en diciembre del 2016 y el mismo mes del 2018. Sin embargo, la opción de venderla o fusionarla con otra entidad va ganando fuerza debido a la situación de la bolsa.

Por el tamaño de Bankia, una operación de este tipo solo sería posible en España para el Santander, el BBVA, CaixaBank y el Sabadell. Los gestores de Bankia confiaban hace años en seguir en solitario, pero comienzan a aceptar que una operación corporativa puede ser la mejor vía para privatizarla. Como suelen reconocer los banqueros, todos hablan con todos sobre posibles integraciones, si bien la entidad presidida por Ana Botín parece en principio que sería la menos interesada, pues aún está digiriendo la compra del Popular.

LAS DOS OPCIONES # La venta en metálico a una entidad mayor como BBVA o CaixaBank supondría, en principio, una menor recuperación de ayudas. La entidad adquiriente tendría que pagar una prima de control sobre el valor bursátil por la participación del Estado de Bankia, pero con casi toda seguridad no alcanzaría el 540% que sería ne-

Las acciones de la entidad que preside Goirigolzarri cayeron el 8,3% tras el pacto entre PSOE y UP

cesario para que las arcas públicas recuperasen lo aportado.

Una fusión entre iguales con el Sabadell (su valor en bolsa es similar) mediante un intercambio de acciones, en cambio, permitiría valorar las dos entidades según su valor intrínseco, no solo el bursátil, y facilitaría al Estado mantenerse en el capital con una participación más diluida e ir vendiendo más adelante.

El Sabadell lo ve con buenos ojos, informa **Max Jiménez Botías**. Las dos entidades tienen modelos de negocio complementarios y mantuvieron conversaciones a principios del 2018. Cualquier operación pasa porque haya un nuevo Gobierno y el visto bueno del BCE, que debe valorar si la entidad resultante es solvente y sostenible. ■



► Autoridades ► El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y la ministra de Economía, Nadia Calviño.

¿Cuánto costará el rescate?

La mayor parte de los 54.353 millones inyectados se perderán ≡ Bankia tendría que revalorizarse el 707% para que el Estado pudiera recobrar todo lo aportado al sector

|| P.A.
MADRID

La cuenta final todavía tardará algunos años en saldarse, pero es prácticamente seguro que será negativa para los contribuyentes. A pesar de las promesas que en su día realizaron los gobiernos de Rodríguez Zapatero y Rajoy, el Estado no recobrará todo lo aportado a los bancos quebrados (mayoritariamente cajas) durante la gran recesión. «Es muy difícil que se recupere el conjunto del dinero que se inyectó al sector financiero», admitió en enero la ministra de Economía, Nadia Calviño.

Las cifras bailan según los conceptos que se incluyan. El Banco de España solo tiene en cuenta las aportaciones de capital y las futuras pérdidas que el Estado se comprometió a asumir en las entidades rescatadas para que las compraran otros bancos sanos. El organismo supervisor ha actualizado esta semana sus cifras y estima que el coste del rescate a día de hoy asciende a 42.642 millones, el 78% de los 54.353 millones inyectados como capital y 132 millones más que un año antes.

La cantidad va variando por tres factores. Por un lado, por la cotización bursátil de Bankia,

que ha caído un 72,14% desde que el Banco Central Europeo (BCE) comenzó a poner los tipos oficiales en negativo en junio del 2014. Con cifras del cierre del 2018, el Estado considera recuperables 9.560 millones, el 39% de los 24.069 que le inyectó. Pero en lo que va de año, sus acciones han bajado otro 40,71%.

Un segundo elemento es el valor del 45% de la Sareb en manos públicas, que sigue hundándose debido a los continuos números rojos del banco malo. El Estado le aportó 2.192 millones y ya ha tenido que asumir unas pérdidas contables de 2.024 millones, el 92% del total. Los gestores de la empresa han reconocido que no podrán devolverlo todo y su objetivo ahora es no tener que pedir más.

El tercer factor son las pérdidas que el Estado se comprometió a cubrir en las entidades intervenidas para que las compraran bancos solventes. La factura de estas garantías para las arcas públicas se estabilizó el año pasado en 2.326 millones, pero gracias a que las más relevantes se cargaron contra el Fondo de Garantía de Depósitos. Este fondo es financiado por el sector y acumula ya un coste de 21.059 millones entre pérdidas asumidas

La mayor esperanza para recuperar más ayudas públicas es que Bankia suba en el 'parquet'

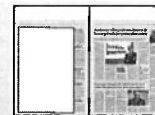
La cotización de la entidad financiera ha caído el 72,14% desde los tipos en negativo del BCE

e inyecciones de capital.

Frente a todo ello, el Estado solo ha recuperado 4.477 millones, el 8,2% del capital inyectado; y el Fondo de Garantía de Depósitos, otros 748 millones, el 7,6%. Teniendo en cuenta la precaria situación de la Sareb y que las pérdidas por las garantías no bajan, la principal esperanza para aumentar la recuperación de ayudas es que Bankia suba en bolsa. Pero tendría que revalorizarse un 707% para devolver todo lo inyectado al sector, algo prácticamente imposible.

Peor alternativa

Frente a estas pérdidas casi seguras, el argumento de las autoridades es que la alternativa hubiera sido peor. Si se hubiera dejado caer a las entidades quebradas, el Tesoro habría tenido que emitir deuda para cubrir los 250.000 millones en depósitos garantizados de dichas entidades y los clientes hubieran perdido otros 237.000 millones en depósitos no protegidos (por encima de 100.000 euros). «Hubiera supuesto casi automáticamente el rescate completo de nuestra economía o bien incluso nuestra expulsión de la unión monetaria», aseguró en el 2018 el entonces ministro Luis de Guindos. ■



El BCE estudia rebajar el capital exigido a los bancos que se fusionen

INCENTIVOS A LA CONCENTRACIÓN BANCARIA/ El supervisor quiere evitar que sus requerimientos adicionales a las entidades desincentiven las operaciones corporativas y pone sobre la mesa una modificación.

Andrés Stumpf. Madrid

La concentración del sector bancario es cada vez más importante para la supervivencia de las entidades. Prueba de ello es que incluso el Banco Central Europeo (BCE) se plantea cruzar líneas rojas que hasta ahora parecían infranqueables.

El supervisor siempre menciona las fusiones y adquisiciones entre bancos como uno de los mejores remedios para mejorar su rentabilidad en un momento en el que alrededor del 75% de las entidades europeas no logra cubrir su coste de capital. Sin embargo, ahora reconoce que el mismo podría haberse convertido en un impedimento para este proceso de consolidación tan necesario.

“Algunos nos señalan que debemos buscar los obstáculos a estos procesos en nuestra propia casa”, sostiene Yves Merch, vicepresidente del consejo de Supervisión del BCE desde el pasado julio, que aseguró, en una conferencia en París organizada por la agencia de rating S&P, que “nuestra aversión al riesgo no debe traducirse en bloqueos a las iniciativas de consolidación dirigidas por el mercado”.

Por ese motivo, y en un intento por aliviar las elevadas exigencias regulatorias a las que se somete a las entidades resultantes de una fusión, el banquero luxemburgués sostiene que el BCE estudia revisar los criterios por los que determina sus requerimientos.

Flexibilidad

En ese sentido, Merch se refiere de forma particular a las exigencias adicionales de capital y a los planes de saneamiento de balance —estrategia para deshacerse de los activos tóxicos— que impone a la entidad resultante de una fusión y que, en el futuro podrían aligerarse o volverse más flexibles.

Cuando dos o más entidades plantean al BCE una fusión, éste supervisa parámetros como las expectativas de rentabilidad, su solvencia, la liquidez, su estructura organizativa y su capacidad técnica para cumplir con los requerimientos de gobernanza. El problema es que el BCE podría estar siendo demasiado



También estudiará si relajará sus exigencias de saneamiento del balance tras una fusión

Un mayor periodo de gracia para cumplir con los niveles de capital tras la fusión daría aire a los bancos

El supervisor debate si priorizar las futuras sinergias frente a los requisitos a corto plazo

Eurotower, sede de la rama de supervisión del BCE en Fráncfort.

¿Cuándo decide el BCE sobre una fusión bancaria?

Las fusiones entre distintos bancos se regulan en Europa a través de leyes nacionales y no de legislación comunitaria. Por ese motivo, la implicación del Banco Central Europeo (BCE) depende del país al que pertenece cada una de las entidades que forman parte de la operación. En Alemania o Luxemburgo, el supervisor no ha tenido tradicionalmente potestad

para aprobar o desechar fusiones, por lo que, tras el traspaso de poderes al BCE, éste tampoco tiene esa prerrogativa, salvo en los casos en los que se cree una estructura de holding. De esta forma, la función del BCE sobre una fusión en estos países se limita a supervisar que individualmente cumplen los requerimientos. Por su parte, en países como

Italia, España, Grecia o Bélgica, el supervisor tiene el poder para aprobar fusiones y, por lo tanto, se ve involucrado en el proceso. Si dos o más bancos deciden fusionarse, el consejo de Supervisión del BCE valorará la solvencia, la rentabilidad, la estructura, la liquidez y la capacidad técnica para cumplir con los requisitos de gobernanza de la entidad resultante.

conservador en sus previsiones y, por consiguiente, demasiado exigente en sus condiciones para dar luz verde al proceso.

Según el vicepresidente del consejo de Supervisión, la atención especial sobre entidades fusionadas se agudiza “al menos durante los primeros compases de su nueva vida, pues existen ciertos riesgos operacionales derivados de la fusión de estructuras complejas”, aunque añade que “eso no debe dar lugar a una duplicidad de exigencias”.

“¿Reflejan realmente nuestros requerimientos las sinergias cosechadas de una operación corporativa?”, se pregun-

ta el supervisor, poniendo sobre la mesa la posibilidad de que el BCE priorice las ventajas a medio-largo plazo de una fusión bancaria frente a garantizar en todo momento que en el corto plazo la entidad resultante cumple todos los parámetros regulatorios establecidos.

Pero ajustar los requerimientos a la realidad no quiere decir que el BCE vaya a posicionarse en un futuro a favor de cualquier operación. “Tenemos que tomar una posición neutral” asegura Merch, que añade que “evaluamos las propuestas de fusiones y adquisiciones exclusivamente bajo criterios técnicos”. Sin facilitar, pero, en la

medida de lo posible, también sin obstaculizar.

En cualquier caso, explica que “harán falta argumentos muy robustos para decretar una reducción temporal de los niveles de capital exigidos tras una fusión”.

¿Grandes o sólidos?

Según fuentes financieras, un periodo de gracia más benigno en lo que respecta a los requerimientos de capital y a la estrategia para deshacerse de activos tóxicos en el balance facilitaría enormemente las fusiones y adquisiciones. Las entidades podrían afrontar con más calma las desinversiones o ampliaciones de capital oportunas, lo que se tra-

duciría en menores costes. “Las prisas, en el mercado, restan poder de negociación. Si vendes bajo presión, vendes más barato”, aseguran.

Pese a las ventajas de las fusiones y adquisiciones en el sector, y de que el BCE ve en ellas una oportunidad para aliviar la sobrebancarización que caracteriza a la zona euro, Merch asegura que “la consolidación no es la respuesta a todo”.

“Fusionar dos bancos débiles no genera mágicamente uno fuerte. De la misma forma, cuando una entidad fuerte integra una débil, puede no dar lugar a una firma sólida; sino a una más grande, pero menos sana”, explica el banquero luxemburgués. Eso sí, reconoce que la concentración puede ser la llave para uno de los problemas más acuciantes a los que se enfrenta la banca: la reducción de costes.

“Aunque es responsabilidad de cada banco actuar como crea conveniente para blindar su futuro, los políticos y los legisladores pueden proporcionar las condiciones adecuadas para ello. Siete años después de la propuesta de la Unión Bancaria, ya va siendo hora de tener un mercado bancario realmente europeo”, concluye Merch.

Moody's rebaja a «negativa» la calificación de los bancos alemanes

► El último Consejo de Draghi terminó con una llamada a la unidad en el BCE

ROSALÍA SÁNCHEZ
CORRESPONSAL EN BERLÍN

Las quejas de los bancos alemanes sobre los daños colaterales que la política de tipos negativos del BCE está causando en su rentabilidad no responden

solamente a una percepción subjetiva. La agencia de calificación financiera Moody's llega a las mismas conclusiones y por ello ha rebajado su nota sobre los bancos alemanes. Prevé, de hecho, una caída de su rentabilidad y de su solvencia entre los próximos 12 o 18 meses y ha cambiado su calificación de «estable» a «negativa». Según Bernhard Held, de Moody's, los bancos tradicionales, en particular las que hacen negocio con los depósitos, «lucharán para ser rentables en un entorno de tasas continuamente bajas», por lo que desaconseja la inversión en sus acciones.

El Bundesbank reconoce con amargura la corrección de estas previsiones. Claudia Buch, la vicepresidenta del banco central alemán, admitió ayer que desde hace ya un año «la vulnerabilidad de los bancos ante el riesgo del crédito aumenta gradualmente», advirtiendo que los bancos alemanes han subestimado los riesgos tanto de los créditos concedidos, sobre todo el valor de las garantías, como los bienes inmobiliarios, lo que podría ser perjudicial en caso de un cambio de coyuntura. Y hace estas declaraciones cuando el PIB alemán acaba de esquivar por muy poco la recesión técnica en el tercer trimestre.

Conscientes de la situación, los bancos alemanes toman medidas drásticas, especialmente teniendo en cuenta la cultura ahorradora de este país. El banco cooperativo Volksbank Raiffeisenbank Fuerstfeldbruck, por ejemplo, acaba de anunciar su decisión de cobrar a sus nuevos clientes por sus depósitos a partir del primer euro.

El hacha de guerra, enterrada
Mientras, los responsables políticos del BCE enterraron el hacha de guerra en su reunión del mes pasado, la reunión de despedida de Mario Draghi. Según consta en las actas de la reunión, publicadas ayer, hubo varios discursos críticos con la línea Draghi, pero en un tono bastante más moderado que en anteriores encuentros, en los que el programa de impresión de dinero había dividido amargamente al Consejo.

En la reunión de septiembre, un tercio del Consejo se opuso a la nueva operación de compra de bonos. «Mirando hacia el futuro, se hizo un fuerte llamado a la unidad del Consejo de Gobierno», dice el informe de la reunión de octubre. «Si bien se subrayó que las discusiones abiertas y francas en el Consejo de Gobierno eran absolutamente necesarias y legítimas, se consideró importante llegar a un consenso y unirse al compromiso del Consejo de Gobierno de alcanzar su objetivo

SOCIEDAD ABSORBENTE MAESTRE BIKES BILBAO, S.L.U.

SOCIEDADES ABSORBIDAS MAESTRE BIKES CANTABRIA, S.L.U. y MAESTRE BIKES VITORIA, S.L.U.

El Socio Único de MAESTRE BIKES BILBAO, S.L.U. (NIF B-95443362) y de MAESTRE BIKES CANTABRIA, S.L.U. y MAESTRE BIKES VITORIA, S.L.U. (NIFs respectivos B-95542114 y B-95628947), con fecha 11 de noviembre de 2019, ha aprobado la fusión por absorción de MAESTRE BIKES CANTABRIA, S.L.U. y MAESTRE BIKES VITORIA, S.L.U., como sociedades absorbidas, por la primera, como Sociedad Absorbente, con extinción por disolución sin liquidación de las absorbidas y transmisión en bloque de su patrimonio a la sociedad absorbente que adquiere, por sucesión universal, los derechos y obligaciones de las sociedades absorbidas.

Dado que las Sociedades absorbente y absorbidas están íntegra y directamente participadas por el mismo socio único, es de aplicación el artículo 49 de la Ley 3/2009 (por remisión del art. 52), no procediendo relación de canje ni los informes de expertos independientes y del Órgano de Administración sobre el proyecto de fusión. Por haberse acordado la fusión conforme al artículo 42 de dicha Ley, no es precisa la publicación o depósito de los documentos exigidos por la ley ni el informe de los administradores sobre el proyecto de fusión, respetándose, en su caso, los derechos de información expresamente recogidos en dicho art. 42.

Se hace constar el derecho de todos los socios y acreedores de las sociedades que participan en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y el balance de fusión, así como el derecho que asiste (en los términos previstos en el artículo 44 de la Ley 3/2009) a los acreedores de las sociedades intervinientes a oponerse a ésta durante el plazo de un mes, a contar desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo.

En Bilbao a 11 de noviembre de 2019.

Don Pedro M^o Maestre de la Fuente, Administrador Único de MAESTRE BIKES BILBAO, S.L.U., MAESTRE BIKES CANTABRIA, S.L.U. y MAESTRE BIKES VITORIA, S.L.U.

VENTOCAR, S.L.U. (SOCIEDAD ABSORBENTE) VENTOCAR ALQUILERES, S.L.U. (SOCIEDAD ABSORBIDA)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (en adelante, "LME"), se hace público que las Juntas Generales Extraordinarias y Universales de socios de las citadas Sociedades, celebradas ambas el día 19 de noviembre de 2019, aprobaron por unanimidad la fusión de dichas sociedades mediante la absorción de "Ventocar Alquileres, S.L.U." (sociedad absorbida), por "Ventocar, S.L.U." (sociedad absorbente), con la consiguiente disolución sin liquidación de la sociedad absorbida y el traspaso en bloque de su patrimonio a la sociedad absorbente, conforme a los términos y condiciones del proyecto común de fusión, suscrito por los órganos de administración de las sociedades intervinientes.

De conformidad con lo establecido en el referido artículo 43 LME, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de ambas sociedades a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión, así como el derecho que asiste a los acreedores de las sociedades que se fusionan a oponerse a la fusión, en los términos establecidos en el artículo 44 LME, durante el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de publicación del último anuncio de fusión.

Castellón, 20 de noviembre de 2019.- Administrador Único de Ventocar Alquileres, S.L.U. y de Ventocar, S.L.U. D. Ventura

La OCDE apunta al cambio climático como riesgo económico "estructural"

SILVIA AYUSO / IGNACIO FARIZA. París / Madrid
El principal riesgo para la economía mundial no es un "shock cíclico", sino "cambios estructurales" que los Gobiernos siguen sin atender, según subraya la Organización para la Coope-

ración y el Desarrollo Económico (OCDE) en su cuadro económico global, publicado ayer. El *think tank* de los países ricos divide entre los que ya se podrían catalogar como problemas clásicos —las tensiones comerciales y geopolíti-

cas— y dos nuevas variantes: la digitalización y, muy especialmente, el cambio climático. En cuanto a este último, pide actuar con urgencia, sobre todo aprovechando estímulos fiscales a largo plazo.

riesgo de recesión permanece lejano, contrariamente a los lúgubres pronósticos que han ido ganando predicamento en los últimos meses. Dicho esto, el resfriado en los principales motores de crecimiento empieza a ser más preocupante: de entre las grandes economías, el frenazo es especialmente brusco en la zona euro, que pasará de rozar el 2% de crecimiento en 2018 al 1,2% este año y el 1,1% en 2020, lastrada por sus dos principales polos industriales, Alemania e Italia —"en buena medida, como reflejo de la mayor dependencia del comercio internacional"—; y EE UU, que pasará de rozar el 3% al 2,3% en 2019 y el 2% el próximo ejercicio pese al buen tono del consumo.

Los malos presagios sobre la economía global se suceden semana tras semana, informe tras informe: en octubre fue el turno del FMI y ahora le toca a la OCDE. En un clima de creciente tensión comercial, menor demanda privada e inversión lastrada por la incertidumbre, el crecimiento mundial se quedará este año y el próximo en el 2,9%, su nivel más bajo desde la Gran Recesión y casi medio punto por debajo de la media del último lustro. Un escenario adverso, con correcciones a la baja, del que la OCDE lleva meses avisando y que constató ayer. "Son tiempos preocupantes y los políticos deberían preocuparse. El crecimiento lento está aquí para quedarse, porque lo que está manteniendo bajo el crecimiento son cambios fundamentales en las formas en que funcionan nuestras economías", lanzó al presentar en París el informe su economista jefe, Laurence Boone.

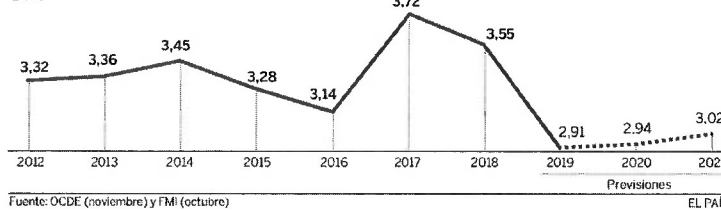
Una cuestión en la que abunda el informe que ella dirige. "El cambio climático y la digitalización son cambios estructurales en marcha para nuestras economías", subraya Boone al comienzo de la última revisión del año de la OCDE. A ambos factores se suma, continúa, que "la política comercial y la geopolítica se están apartando del orden multilateral de la década de los noventa". "Sería un error considerar estos cambios como factores temporales: son estructurales y, en ausencia de estos cuatro temas, la incertidumbre seguirá cerniéndose sobre nosotros, dañando las perspectivas de crecimiento". El organismo carga las tintas contra la "falta de una dirección política" para intentar paliar sus efectos en unos momentos en los que el mundo experimenta un incremento de fenómenos meteorológicos extremos,

Previsiones económicas de la OCDE y del FMI

Crecimiento del PIB en %

	OCDE			FMI		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Economía mundial	3,5	2,9	2,9	3,6	3,0	3,4
G-20	3,8	3,1	3,2			
OCDE	2,3	1,7	1,6			
EE UU	2,9	2,3	2,0	2,9	2,4	2,1
Zona euro	1,9	1,2	1,1	1,9	1,2	1,4
Japón	0,8	1,0	0,6	0,8	0,9	0,5
No OCDE	4,6	3,9	4,0			
China	6,6	6,2	5,7	6,6	6,1	5,8
India	6,8	5,8	6,2	6,8	6,1	7,0
Brasil	1,1	0,8	1,7	1,1	0,9	2,0

Crecimiento de la economía mundial



como huracanes o inundaciones, "que podrían provocar disrupciones significativas en la actividad económica a corto plazo, así como daños de larga duración al capital y las tierras, además de provocar flujos migratorios desordenados", enumera Boone. Por eso, insiste, los Gobiernos "deben actuar rápidamente", porque "sin una orientación clara en los precios del carbono, estándares y regulación, y sin la inversión pública necesaria, las empresas aplazarán decisiones de inversión, con nefastas consecuencias para el crecimiento y el empleo". "No hacer esas inversiones ahora es aumentar los costes a largo plazo de la transición energética", recalca Boone en la rueda de prensa.

El panorama es malo, pero el

El frenazo llega a Latinoamérica

El nuevo cuadro macroeconómico de la OCDE es un jarro de agua fría sobre las principales economías latinoamericanas. El *think tank* de los países ricos recorta en seis décimas el pronóstico de crecimiento de Brasil, el país más grande de la región, para este año y el próximo —del 1,4% al 0,8% y del 2,3% al 1,7%, respectivamente—. Aún mayor es el tjeretazo para México, inmerso desde hace meses en un peligroso balle con la recesión: este año crecerá solo el 0,2%, frente al optimista 1,6% pronosticado

en mayo, y en 2020 repuntará un tímido 1,2%, ocho décimas menos de lo previsto hasta ahora. Argentina, que en los próximos meses tendrá que renegociar a cara de perro las condiciones de su rescate con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sufrirá un retroceso del PIB del 1,2% este año y del 3,8% el próximo.

Su vecino Chile, por su parte, ve mermada su previsión hasta el 2,2% en 2019 y el 2,4% en 2020, siempre sujeto a que el estallido social no empeore aún más las cosas. Colombia es la única sorpresa positiva, con una expansión económica firmemente asentada por encima del 3% en ambos ejercicios. / I. FARIZA

Senda bajista

La economía china proseguirá su senda bajista bajo el mantra del "aterrizaje suave" —"aunque la ralentización podría ser más brusca de lo previsto"—: en 2020 el crecimiento quedará por debajo del 6% por primera vez en tres décadas, perjudicado por una guerra comercial con EE UU que añade un grado adicional de presión a ambas orillas del Pacífico. En un panorama tan sombrío, India emerge como una de las escasas buenas noticias mundiales, con una expansión que —tras el tjeretazo de 2019— recuperará el suelo del 6% el año que viene.

Aunque varía notablemente entre países —"EE UU tiene más que la eurozona y Japón", subrayan los economistas de la OCDE—, el margen de los bancos centrales para relanzar el crecimiento es cada vez más estrecho. Ante este agotamiento, el club de los 36 países más industrializados del planeta llama a dar un paso al frente en la inversión pública, el que más resistencias está encontrando. "Si el crecimiento y la inflación se ralentizaran más de lo previsto, la política monetaria debería seguir flexibilizándose. Pero debería ir acompañado de una política fiscal contracíclica", agregan los técnicos de la OCDE. "Hay una necesidad urgente de acciones más atrevidas para relanzar el crecimiento y los Gobiernos deben enfocarse no solo en los beneficios a corto plazo de los estímulos fiscales", concluyen. Miras largas, en definitiva, para afrontar los problemas que marcarán el devenir de la economía global en las próximas décadas.